





CATHEDRA

No. 20 – Año 12
Noviembre 2023 – Abril 2024

La Revista CATHEDRA, revista de Derecho y Ciencias Forenses, es una publicación en formato impreso y digital, de periodicidad semestral, en la cual se divulgan artículos de investigación, ensayos o artículos teóricos relacionados con el Derecho y las Ciencias Forenses. Su Comité Editorial exige la originalidad de cada artículo sometido a consideración para su publicación.

Los trabajos presentados provienen del esfuerzo constante de la comunidad de investigadores, alumnos y docentes que integran la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT) y también de aquellos estudiosos del Derecho y de las Ciencias Forenses de otras instituciones nacionales e internacionales, interesados en exponer los resultados de sus investigaciones o sus reflexiones sobre temáticas del área, con la rigurosidad científica que exige una publicación arbitrada y cuyos trabajos encuadren en las políticas y normas editoriales de la revista y en correspondencia con las normativas de bioética institucional.

MISIÓN

CATHEDRA se propone contribuir al desarrollo del conocimiento a través del análisis de temáticas del Derecho y las Ciencias Forenses, para enriquecer el acervo científico y filosófico por medio de la difusión de avances y resultados de investigaciones científicas de alta calidad y pertinencia social, capaces de incidir positivamente en el desarrollo cognoscitivo de los profesionales del área.

VISIÓN

Ser una Revista arbitrada e indizada con reconocimiento mundial, caracterizada por contribuir a la consolidación de la cultura investigativa al difundir avances y/o resultados de investigaciones en el área del Derecho y las ciencias forenses.

Revista científica Indizada en Latindex

Versión electrónica disponible en: www.umecit.edu.pa

Dirección electrónica para canjes o envíos de trabajo: cathedra@umecit.edu.pa

Diagramación: Lic. Arturo Nieto Nuñez

Queda prohibida, sin autorización escrita de los titulares de los derechos de autor, bajo las sanciones contempladas por las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluida la fotocopia, el procesamiento informático y la distribución de ejemplares de esta obra mediante alquiler o préstamo.



AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Dr. José Alberto Nieto Rojas
Rector

Dra. Claudia Marcela Rueda Ossa
Vicerrectora General

Mgtra. María Piedad Nieto
Vicerrectora Administrativa

Mgter. Hermes Mauricio Sierra
Vicerrector académico

Dra. Magdy De las Salas
Directora de Investigación, Innovación y Postgrado

Mgter. Ricardo Camarena
Director Académico

Mgtra. Teresa de Irving
Directora de Extensión

Mgtra. Britania Montenegro
Secretaria General

REVISTA CATHEDRA

EQUIPO EDITORIAL

EDITOR:

Mgr. Gino Osellame
Docente de la Facultad de Derecho y Criminalística de la UMECIT
ginosellame@yahoo.com

COEDITORES:

Dra. Magdy De las Salas Barroso
Directora de Investigación, Innovación y Postgrado de la UMECIT
direccioninvestigacion@umecit.edu.pa

Mgs. María Piedad Nieto
Vicerrectora Administrativa de la UMECIT
vicerrectoria.administrativa@umecit.edu.pa

COMITÉ EDITORIAL:

Dra. Ana Emérita de Villalaz
Profesora emérita de la Universidad de Panamá
Exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Panamá

Dr. Roberto Hernández Sampieri
Universidad de Celaya, México

Dra. Nixa de Ríos
Rectora de la Universidad Tecnológica de Oteima. Chiriquí, Panamá

Mgs. Juan Antonio Kuan Guerrero
Instituto Panameño de Derecho Procesal Penal, Panamá
Docente de la Universidad de Panamá
Abogado penalista

Dr. Juan David Nieto Rueda
Relaciones Internacionales UMECIT
jdnieto@diazcastillo.com

ÍNDICE

Gino Osellame

Presentación de la edición.....	6
----------------------------------------	----------

José Alberto Nieto Rojas

Editorial.....	8
-----------------------	----------

Ensayos:

Margarita Isabel Erne Morales, Panamá

La caducidad como medio extraordinario de terminación del proceso.....	10
-------------------------------------------------------------------------------	-----------

Gisel Olmedo, Panamá

Inscripción provisional de ordenes proferidas por autoridad competente en el Registro Público de Panamá.....	20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Luis Peñalba, Panamá

El juez de cumplimiento como garante del respeto de los derechos humanos del privado de libertad en el proceso penal.....	37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Yadira Bonilla Caballero, Panamá

La auditoría forense, como herramienta de fiscalización a la operación de la Caja de Seguro Social en Panamá.....	52
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Artículos de investigación:

Khumar Villalobos, Panamá

El régimen jurídico de mujeres en lactancia en detención provisional o cumplimiento de una sentencia condenatoria.....	65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Normas de publicación de la Revista.....	86
-------------------------------------------------	-----------

PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN

Gino Osellame R.

Universidad UMECIT, Panamá

Editor de la Revista Cathedra

ginoosellame@gmail.com

ginoosellame.blogspot.com

<https://orcid.org/0000-0001-5925-5479>

Roma locuta, causa finita, Panamá Locuta, causa finita. El año 2023, cierra con una de las experiencias jurídicas, que marcarán un hito histórico, en cuanto al ejercicio de los derechos políticos y constitucionales, y la real manifestación de las fuerzas excluyentes de poder, versus el equilibrio manso de los órganos del Estado, que, bajo la justificación de la gobernanza, ha hecho del poder del ejecutivo un tótem centralista, como modelo democrático absorbido por la sociedad en general.

Un Órgano Judicial, fortalecido respondió en tiempo y a favor de los intereses de la sociedad, el incorrecto obrar normativo que el Ejecutivo y el Legislativo, y es que la inconstitucionalidad de las normas, no deben ser permitidas, y si no es este el caso, entonces las ciencias jurídicas modernas han fracasado.

Inicia la revista, como es lo acostumbrado con el editorial del Rector de UMECIT, José Alberto Nieto Rojas, como máxima autoridad de nuestra casa de estudios superiores, en la cual manifiesta su complacencia por esta edición y la continuidad de nuestra revista, como un medio de divulgación y aporte a la academia en el campo de las ciencias forenses y el derecho.

Tenemos en esta edición la fortuna de contar con una contribución especial, de una abogada incaísta, procesalista e independiente, con un alto nivel de experiencia en litigios, y es que la práctica del abogado litigante, frente a los tribunales, siempre debe ser escuchada y leída, para el fortalecimiento de los conocimientos doctrinales. Margarita Isabel Erne Morales, nos presenta el ensayo, **LA CADUCIDAD COMO MEDIO EXTRAORDINARIO DE TERMINACION DEL PROCESO**, en el que nos hace una radiografía, a esta institución jurídico procesal, que afecta a las partes en los procesos civiles.

Tenemos la oportunidad de contar con un nuevo artículo de la especialista en materia de derecho registral, Gissel Olmedo, quien, por medio de su artículo, **INSCRIPCIÓN PROVISIONAL DE ORDENES PROFERIDAS POR AUTORIDAD COMPETENTE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ**. Nos explica ampliamente la autora, que las inscripciones provisionales

relacionadas a bienes y actos sujetos a registro, tienen su origen en procesos judiciales y que tienen por finalidad, el reconocimiento y ejercicio de un derecho sobre los bienes de las partes en un proceso determinado. Pero, nos preguntamos, ¿hasta dónde la orden de un juzgador, conmina a la obediencia del Registro Público?, la respuesta debemos leerla de la pluma de esta autora, es en este interesante manuscrito.

Luis Peñalba, Docente Universitario y Doctor en Derecho, nos brinda amablemente su conocimiento, en el Sistema Penal Acusatorio, apoyando no solo a estudiantes de educación superior, sino a la comunidad penalista en general. **EL JUEZ DE CUMPLIMIENTO COMO GARANTE DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PRIVADO DE LIBERTAD EN EL PROCESO PENAL**, es una lectura obligada en el que se nos presenta más allá de las normas adjetivas, la finalidad del sistema de corte adversarial, frente al compromiso de protección de las garantías fundamentales, normas constitucionales y el resguardo del principio de legalidad.

También acompaña esta edición, un ensayo en materia forense, **LAAUDITORIA FORENSE, COMO HERRAMIENTA DE FISCALIZACION A LA OPERACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL EN PANAMA**, escrito por la abogada litigante, contadora pública autorizada y auditora forense, Yadira Bonilla Caballero, desarrolla el papel de la auditoría forense, para la efectiva protección de los bienes y activos de la Caja de Seguro Social, con la finalidad de que los recursos de esta importantísima institución del Estado, cumplan efectivamente las funciones públicas que por Ley le fueron conferidas.

Finalmente, para ilustrarnos en materia de Derecho Penal, continúa el tema **EL RÉGIMEN JURÍDICO DE MUJERES EN LACTANCIA EN DETENCIÓN PROVISIONAL O CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA**. Su autor el destacado estudioso del Derecho y docente de planta de esta casa de estudios superiores, Khumar Villalobos, nos hace una referencia investigativa, más allá de las consecuencias de las normas penales y del proceso en sí. Nos plantea las dicotomías del régimen de cumplimiento de penas, cuando confluyen Derechos Humanos, y bienes jurídicos que sobrepasan los límites de la sanción, de la exclusión de la sociedad producto de haber infringido la ley, tal como lo es, la protección a la mujer.

EDITORIAL

José Alberto Nieto

Rector de la Universidad UMECIT, Panamá
rectoria@umecit.edu.pa

En un mundo cada vez más digitalizado, la intersección entre la ley y la tecnología se ha convertido en un campo crucial y dinámico. La Revista Cathedra se complace en presentarles un análisis profundo en varias áreas del Derecho y las Ciencias Forenses desarrollados por nuestros estudiantes, docentes e investigadores.

La Informática Jurídica Forense e Inteligencia Artificial marca un hito significativo en la evolución de la formación académica, de nuestros estudiantes de derecho al igual que los abogados que fusionando la experiencia legal con las últimas tendencias en inteligencia artificial se complementan perfectamente y adquieren habilidades especializadas para abordar los desafíos emergentes en la aplicación de la ley en un entorno tecnológico en constante cambio que les permite una habilidad y competencias en informática.

El contenido de la revista Cathedra aborda temas de vanguardia y actuales donde participan estudiantes, docentes - investigadores, con casos relevantes y situaciones simuladas para aplicar sus conocimientos de manera efectiva. Este enfoque práctico, asegura que los estudiantes y profesionales del Derecho estén preparados para enfrentar los desafíos del mundo real al salir del programa o simplemente para poder ejercer la profesión en la actualidad y abordar temas de derechos humanos como el régimen jurídico de mujeres en lactancia en detención provisional o cumplimiento de una sentencia condenatoria, como prevalece en el derecho de los niños.

La globalización de los desafíos legales y tecnológicos exige una formación que trascienda fronteras y es lo que hace la Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología UMECIT con la permanente evaluación y actualización de los programas académicos tanto en grado y postgrado, los cuales ha mantenido de forma constante y permanente, al igual que la creación e implementación de cursos, talleres, seminarios y diplomados con temas novedosos y de actualidad académica

En la Revista Cathedra, celebramos la creación de iniciativas educativas que integran de manera innovadora la tecnología y el derecho y las ciencias forenses, preparando a profesionales para liderar el camino en el complejo cruce entre la ley y la inteligencia artificial.

Agradecemos a todos los estudiantes y profesionales que postulan sus trabajos e investigaciones en nuestra revista para ser publicados lo cual ha garantizado la regularidad en las ediciones y el convertirse en un medio de lectura atractivo nacional e internacional. Esta edición cuenta con diversos artículos de gran relevancia que esperamos sean del agrado e interés de nuestros lectores y quienes las consultan.

LA CADUCIDAD: MEDIO EXTRAORDINARIO DE TERMINACION DEL PROCESO

Margarita Isabel Erne Morales

Abogada litigante, Panamá

margaritaemorales@yahoo.com

<https://orcid.org/0009-0003-9442-3804>

DOI: 10.37594/cathedra.n20.1221

Fecha de recepción: 05/10/2023

Fecha de revisión: 05/11/2023

Fecha de aceptación: 10/11/2023

RESUMEN

La caducidad o caducidad de la instancia es una forma distinta, a la que la norma adjetiva ha predispuesto, para la terminación del proceso. Esta sobreviene por la falta de actividad procesal de las partes dentro del procedimiento, dentro de un plazo legalmente determinado. La doctrina no ha coincidido en cuanto a si esta institución jurídica procesal supone un desistimiento tácito de la acción; o mejor dicho, si formalmente se trata de una pena o sanción, a la inactividad procesal de una de las partes o si se trata de una presunción legal de falta de interés en la continuación del caso, que asume el juzgador.

Palabras clave: Proceso, instancia, terminación, término, consecuencias, juzgador.

EXPIRATION: EXTRAORDINARY MEANS OF TERMINATION OF THE PROCESS

ABSTRACT

The expiration or peremption of the instance is a different way, to what the adjective norm has predisposed, for the termination of the process. This occurs due to the lack of procedural activity of the parties within the procedure, within a legally determined period of time. The doctrine has not agreed as to whether this procedural legal institution is a tacit withdrawal of the action; or rather, if it is formally a penalty or sanction, to the procedural inactivity of one of the parties or if it is a legal presumption of lack of interest in the continuation of the case, which the judge assumes.

Keywords: Process, instance, termination, term, consequences, judge.

INTRODUCCION

En el mundo jurídico en especial, los procesos civiles al igual que los penales, conllevan un periplo procesal a través de sus diferentes etapas con el propósito para el que interpone el proceso de culminar con una sentencia favorable en la que se le reconozca su pretensión, que en la mayoría de los casos puede tener una duración larga por todo el recorrido de un expediente procesal. Pero en ese periplo pueden surgir varios medios excepcionales de terminación anticipada del proceso entre las cuales están: la transacción, desistimiento, retiro de la demanda, allanamiento de la pretensión, la caducidad de la instancia en primera y segunda instancia.

Específicamente, abordaremos la caducidad como un medios excepcional o anómalo de terminación y todo dependerá del lugar dentro del proceso en que se encuentren los actores y cuál de ellos tendrá la opción de invocarla a su favor y cual tendrá la oportunidad de oponerse y de ese pronunciamiento jurisdiccional dependerá la vida jurídica del proceso en litigio.

Adentremos entonces al concepto etimológico del término caducidad nos dice Manuel Ossorio que es una acción y efecto de “*caducar*”, acabarse extinguirse perder su efecto o vigor por cualquier motivo, alguna disposición legal, algún instrumento público o privado o algún acto judicial o extrajudicial.¹

Tenemos que para Ossorio “*caducidad de la instancia*” sería entonces el modo de extinguirse la relación procesal por la inactividad de las partes durante cierto periodo. En ese sentido cuando la caducidad, llamada también perención, supone un abandono de la instancia. (ibiden)²

Conceptualmente en sentido jurídico, caducidad es una circunstancia que depende de que exista como elemento primordial un proceso jurídico admitido, luego está la voluntad de los actores, donde se solicita una pretensión y es abandonada por sus actores, llámense demandante y demandado que no han dado el impulso, acción o gestión escrita para que la causa se mantenga vigente, por el término establecido por ley conllevando a una terminación anormal del proceso.

Las causas que conllevan a una caducidad de la instancia, no es homogénea entre los autores y causa contradictorio, ya que no se precisa si se debe a un abandono voluntario de la causa, o a una falta de interés o a un descuido procesal de sus actores o bien una transacción que conlleva a una suspensión del proceso.

1 Manuel Ossorio Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales

2 Ibidem

La caducidad se remonta a la época romana, según diversos autores y tiene su origen en la Leyes Caducarias, Lex Julia Maritandis y Lex Papia Poppaea votadas bajo el gobierno de Augusto comenta Eugenio Petit autor del Tratado Elemental del Derecho Romano, reglamentaban lo relacionado al estado civil, matrimonio y divorcio y fueron aplicadas a los célibes que eran los no casados y a los sin hijos con el ánimo de garantizar la procreación³.

Como el objetivo de las leyes caducarias era alentar el matrimonio y aumentar la población por ello se implementaron sanciones legales para los célibes y los orbi, ejemplo en la Ley Julia Maritandis se les privaba a los célibes de las asignaciones que le eran otorgadas en testamento mientras que los orbis solo podía recibir la mitad de la herencia o legados a los que tuvieran derecho. Los célibes al contraer matrimonio obtenían el derecho de heredar mientras que los orbi si querían recibir la totalidad de la herencia debían tener descendencia y en caso de no hacerlo el derecho caducaba.

Para Gutiérrez y González señala que la esencia de la caducidad en el Derecho Romano consistía: los romanos *“debían asumir voluntariamente y conscientemente el estado de casados si eran célibes o engendrar descendientes si eran orbis, dentro del plazo que las leyes marcaban, sino lo hacían, no nacía el derecho a heredar y su parte hereditaria la parte respecto a la cual se creaba la incapacidad para recibirla, pasaba al padre si es que había designado alguno en el testamento, de esta manera, los padres se veía recompensados con las partes caducas” y si no habían padre, la parte caduca pasaba al tesoro público”*⁴

Según Ángel Guerrero⁵ en su obra caducidad como medio de extinción de la obligación, *“señala que los redactores del Código civil franceses influenciados por Pothier al elaborar el Código Napoleónico, introdujeron en la legislación la figura de la caducidad siendo en este ordenamiento legal en donde se reglamentó como una completa institución jurídica, aplicándole como una sanción a los testamentos y legados”*.

Podemos ver la figura como un medio extraordinario, o como un medio anómalo, de terminación del proceso, ya que al incoarse un proceso civil en virtud de un derecho que existe lo que se busca es que culmine con una sentencia por el juzgador, pero cuando ocurre este fenómeno vemos que estamos ante dos elementos esenciales: la inactividad procesal en un periodo determinado de tiempo ordenado por mandato legal.

3 Eugene Petit Tratado de Derecho Romano

4 Eduardo Gutiérrez y González Derecho de las Obligaciones Puebla, Mexico

5 Ángel Guerrero Caducidad como medio de Terminación del Proceso

El elemento inactividad procesal de las partes, nos lleva a buscar si la misma obedece a un simple no hacer del actor o en su defecto requiere una gestión calificada procesal para agotar alguna etapa procesal como lo son las notificaciones, o bien el impulso procesal que no es más que realizar actos procesales para asegurar la continuidad del proceso como es entregas de oficios, retiro de edicto etc, o también denominamos lo que en la práctica denominamos “*impulso procesal*” a una simple escrito que no es más que decirle al juez, que el proceso está paralizado por razones ajenas al actor como ejemplo admisión de pruebas.

Sobre el término para que ocurra la caducidad esta no opera de pleno derecho, significa que el efecto que origina la situación se produce por una circunstancia legislativa con independencia del ejercicio de las voluntades. Por lo que al no producirse por mero transcurrir del tiempo, la misma deberá, ser invocada y reconocido por el órgano jurisdiccional. Enfatizamos entonces que no existirá caducidad hasta que el juez la declare y ocurra el fenómeno de terminación anticipada del proceso.

Para muchos autores la caducidad viene a ser una sanción a la demandante producida por la inactividad procesal, sin embargo, para el Constitucionalista Jorge Fábrega⁶ la caducidad “*no se funda en la presunta voluntad del demandante de abandonar el proceso, ni en una sanción al demandante inactivo, sino en la necesidad pública de que los procesos no se demoren indebidamente en los tribunales*”.

Para el Doctor Fábrega, existe un interés del ente jurisdiccional, primeramente, del tribunal que está autorizado por imperio de la ley a decretarla oficiosamente con el propósito de desahogar los despachos, sacando expedientes que mantienen una inactividad procesal más que un medio sancionatorio por inactividad de parte.

Al respecto citamos jurisprudencia patria de la Sala Civil del 12 de febrero de 2015 dentro del Proceso ordinario de Oposición a la Adjudicación de C.CH.H vs D.CH.O “*La caducidad de la instancia, tal y como planteamos, es una especie de sanción a la inactividad del demandante por determinado periodo de tiempo, en este caso, ella no puede desvirtuarse porque el tribunal realice una sola gestión para notificar (el actor ninguna). Si partimos de la premisa que lo que se sanciona es el abandono del proceso por parte del recurrente, no puede ignorarse el hecho que el único que ha actuado en vías de realizar la notificación ha sido el tribunal.*”⁷

⁶ Jorge Fábrega Instituciones del Derecho Procesal Civil

⁷ Sentencia Sala Civil 12 de septiembre de 2015

El Código Judicial panameño, contempla varios tipos de caducidad, como medios excepcionales de terminación del proceso civil, tales como son: la caducidad ordinaria, la caducidad especial y la caducidad extraordinaria.

TIPOS DE CADUCIDAD Y SUS EFECTOS

Caducidad de la instancia ordinaria: viene regulada en el Título X, de Medios Excepcionales de Terminación del Proceso, capítulo I, III artículo 1103, *“cuando el proceso se encuentre paralizado por más de tres meses, el juez, de oficio a solicitud de parte decretará la caducidad de la instancia.”* Término que correrá desde la notificación del último acto.

El lapso del tiempo en la caducidad de la instancia viene fijado por mandato legal, véase que hacer referencia exclusiva a la inactividad procesal, en un lapso determinado de 3 meses, aquí la última notificación o gestión efectuada por las partes marca, el término de partida para invocarla.

Nuestro Código Judicial patrio de igual forma señala en su artículo 1112 que ocurre también la caducidad ordinaria, la que se produce por la falta de notificación de la demanda en el término de tres meses y exista una anotación preventiva de la demanda en el Registro Público y se haya practicado medidas cautelares.

Esta caducidad vemos difiere a la primera en el tipo de diligencia procesal ya que se refiere específica a una etapa procesal calificada, exclusivamente a la falta de notificación de la demanda en un lapso de tiempo de los tres meses viene condicionada cuando esta mantiene accesoriamente una medida cautelar inscrita o una demanda provisional inscrita ambas en el Registro Público.

La caducidad ordinaria por abandono procesal donde hace mención de gestión de parte, precisa se den actos procesales por parte del actor demandante como es retirar un aviso emplazatorio, impulsar al tribunal para que efectué por medio del centro de comunicaciones judiciales la notificación personal de la demanda etc.

Nótese, que en ambos casos sigue siendo facultad jurisdiccional del Juzgador, decretarla de oficio como también a *“solicitud de parte”* entendiéndose que el único interesado en invocar esta medida excepcional recae en la figura del demandado o deudor, ya que es quien la invocaría con el único fin de terminar anticipadamente el proceso, dejándose sin honrar la obligación demandada.

Al no operar de pleno derecho la caducidad, en el supuesto que se haya producido la caducidad por inactividad procesal, sin que el juzgador la haya declarado mediante Auto, como tampoco la

haya pedido la parte interesada, perderá el actor la oportunidad de invocarla si ha efectuado gestión o actuación posterior.

El auto que decreta la caducidad extraordinaria por primera vez no entraña la extinción de la pretensión, sino la del proceso en un término establecido por nuestro Código Judicial.

Caducidad especial: esta facultad es exclusiva del defensor de ausente o del curador ad litem, en virtud de un nombramiento del despacho judicial y donde las costas del profesional del derecho no han sido cubiertas por la parte que solicitó el emplazamiento.

Esta facultad de suspensión del proceso de tener asidero, viene a ser acogida y decretada por el juzgador por un espacio de tiempo de 30 días o más, pero al no efectuar el pago de los honorarios reclamados por el defensor, el juez decretará la caducidad de la instancia del proceso.

La caducidad extraordinaria: tiene fundamento en el Código Judicial panameño, en su artículo 1113 que nos dice *“dará lugar a la caducidad extraordinaria la paralización del proceso por dos años o más, sin que hubiere mediado gestión escrita de parte. La resolución respectiva será notificada por edicto y no admitirá recurso salvo el de **Reconsideración**. Sera obligación del secretario recibir escritos que, en cualquier etapa del proceso, presente la parte instando a la actuación.”*

Nos adentramos a la norma y nos lleva al análisis que para que ocurra debe darse la paralización por falta de gestión escrita de parte en cualquier fase del proceso debemos entender cualquier escrito o un impulso procesal que se obtiene mediante una serie de situaciones jurídicas para recordar al juez que el expediente está en su despacho sin decidir.

Pasemos al escenario hipotético en el que se decreta la caducidad extraordinaria de la instancia cuando se ha interpuesto un recurso de apelación de sentencia por algunas de las partes y la misma sustenta su recurso; el expediente es remitido al superior para decidir el medio de impugnación. En el despacho del juzgador ad quem toma alrededor de 25 meses entre que se resuelve el recurso y se remite al juzgador a quo. ¿A quién se le atribuye la caducidad extraordinaria.?

Aquí no podemos pensar que estamos ante una caducidad extraordinaria por falta de gestión de parte, ya que la demora del expediente en la segunda instancia se ha debido a que el Tribunal Superior no ha fallado con celeridad el proceso que tiene entre sus manos para substanciar. Corresponde a las partes recordarle al juzgador que tiene una causa pendiente pudiéndose interpretar

como “*una acción grotesca*” de alguna de las partes la interposición de un impulso procesal como gestión de parte idónea ?

Sobre el particular, nos cuestionamos, a quién corresponde la facultad de impulsar nos dice el autor Couture en su obra “*Fundamentos del Derecho procesal*” en algunos casos, la ley obliga al juez a impulsar el proceso, sin perjuicio de la facultad de las partes de hacerlo. La diferencia es que cuando la ley impone la tarea del impulso al juez no puede producirse la caducidad de instancia porque pasa a ser una excepción a la regla”.⁸

Sigue diciendo el autor cuando el juez está imposibilitado de impulsar el proceso por no estar facultado para ello, la potestad es exclusiva de las partes. Al contrario, cuando, la ley expresamente obliga al juez al impulso, sin necesidad de petición de parte, se exceptúa de la obligatoriedad a las partes.”⁹

Caducidad en Segunda Instancia: ocurre raramente porque la sustanciación del proceso está en manos del Tribunal Superior.

Vemos que la doctrina nos lleva a concluir, que la caducidad extraordinaria aplica cuando las partes no realiza una gestión de parte idónea dentro del término de dos años, en el caso de nuestro derecho patrio establecido en el Código Judicial panameño, pero no aplica para el juzgador cuando el impulso le corresponde por mandato legal ya que se entiende una excepción a la regla.

Con relación a la caducidad extraordinaria existe en la práctica jueces civiles que son del criterio que aun estando el expediente en Segunda instancia aplica la caducidad extraordinaria y cito para ello “*Resolución de 04 de septiembre de 2023 del Juzgado Séptimo civil dentro del proceso ordinario incoado por A.M vs B.C “aun cuando el expediente se encontrara en espera de fallo resolviendo la apelación, las partes pueden presentar ya sean impulsos procesales, sustitución de poder, o cualquier otro escrito que pueda interrumpir la caducidad extraordinaria”*”.¹⁰

Personalmente discrepo de ese criterio, esbozado por el juez séptimo de circuito ya que no estaríamos ante una facultad de gestión de parte per se, que debe ser impulsada por las partes dentro del proceso de marras, no podemos por medio de un escrito de impulso procesal que pueda interpretarse negativamente al cuestionar la demora del Tribunal Superior pues el impulso tal como

8 Couture Eduardo. Fundamento del Derecho Procesal

9 Ibidem

10 Resolución 04 de septiembre de 2023. Juzgado Séptimo de Circuito Civil

dice el autor Couture se lo está imponiendo la norma al juez al otorgarle la facultad de resolver recurso de apelación de una resolución de la Sentencia apelada por alguna de las partes.

Nuestro criterio aplicado al proceso, es que resulta injusto que se presuma que las partes abandonaron el proceso, con una sentencia favorable cuando el impulso debe provenir del Magistrado Sustanciador quien mantiene el expediente en su despacho para fallar.

Vimos recientemente con mucha aceptación en la reciente reforma al Código de Procedimiento Civil (Ley No. 402 de 9 de octubre de 2023), que reduce la caducidad extraordinaria de dos años a un año y en cuanto a quien es imputable la sanción por la inactividad la norma reformada es expresa porque suspende el proceso y excluye a los jueces y magistrados mientras los procesos están en sus despachos.

Ahora cuando estamos ante los procesos administrativos, vemos que es perfectamente aplicable al despacho público que lleva la causa, tal como ocurre con los distintos procesos ejecutivos por cobro coactivo, la parte llámese “*juez ejecutor*” al funcionario administrativo que no impulse ya sea mediante resolución, oficio o bien ante una nota puede incurrir en caducidad extraordinaria siempre que ocurran los dos elementos fundamentales que necesita la figura jurídica: la inactividad procesal y el transcurso del plazo.

Sobre el momento para decretarla, la caducidad extraordinaria no opera de pleno derecho, debe ser decretada de oficio o por solicitud de parte, si al momento de configurarse la misma no hubo declaración del juez ni petición de parte, al mediar una actuación posterior precluye el término para solicitarla.

PROCESOS DONDE NO OPERA LA CADUCIDAD

Caducidad de la instancia no ocurre en todos los procesos civiles, nuestro Código panameño, solo hace mención a invocarla en los procesos sumarios y ordinarios de orden patrimonial, esta no ocurre en los procesos de sucesión, de concurso, de división de bienes comunes, y en los procesos no contenciones.

En los procesos ejecutivos, el auto dictado por el juez, solo se decretará el desembargo de los bienes o el levantamiento de la medida cautelar de secuestro, y el bien no podrá volver a ser secuestrado hasta dentro de un año.

Sin embargo, la acción del desembargo no tendrá viabilidad si la caducidad se decreta dentro

de un proceso ejecutivo donde haya un Tercero Coadyuvante.

Existe una práctica en tribunales de la República, de mantener el proceso en secretaria, por un simple escrito de la parte demandante, comunicando unilateralmente que en caso de los procesos ejecutivos está en ejecución, cuando tienen una medida cautelar, sin embargo aquí la norma también es clara al disponer en su artículo 1103 que *“no correrá el término mientras el proceso hubiere estado suspendido por acuerdo de las partes o por disposición legal o judicial.”* Siendo así mal puede la parte demandante pretender que con un escrito unilateral puede frenar el término de caducidad, cuando no ha llevado a ejecución ninguna medida cautelar decretada, no ha solicitado remate en casos de bienes, o a remitido los oficios de embargo cuando se trate de salario o de cuentas bancarias.

CONCLUSIONES SOBRE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA

1. Caducidad tiene como objetivo que los procesos no se prolonguen indefinidamente y dar certeza a las relaciones jurídicas combatiendo la mora judicial.
2. Es una sanción a la parte que abandone el proceso por 3 meses contados desde la última diligencia.
3. Cuando la demanda haya sido admitida y no se haya trabado la litis, es decir la demanda no se logrará notificar dentro de los 3 meses y exista una medida cautelar.
4. Cuando ocurre el fenómeno de la caducidad no se da la extinción de la pretensión, sino la del proceso.
5. La caducidad no opera por si sola podrá ser invocada de forma oficiosa por parte del Juzgador o bien a solicitud de parte
6. El término de la caducidad no opera si el proceso está suspendido por acuerdo de las partes, u ordenado por mandato judicial. Por lo cual una acción de solicitud de ejecución, comunicado por una de las partes no afecta la petición de caducidad.
7. En los casos en que los jueces mantengan los expedientes en sus despachos para fallar o por cualquier gestión judicial se suspende el termino de la caducidad
8. El Auto que decrete la caducidad será apelable.
9. El auto que decrete la caducidad extraordinaria solo admitirá recurso de Reconsideración.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Couture, Eduardo J. (2014): Fundamentos del derecho procesal civil. 4ª ed. (póstuma, 1958), 1ª de esta editorial. Reimpresión 2014. 496 pp. ISBN 987-1089-05-8.
- Fábrega, Jorge. (1998). Instituciones del Derecho procesal Civil. Panamá : Editora Jurídica Panameña
- Guerrero, Ángel. (1996). Caducidad como medio de terminación del proceso
- Gutiérrez y González, Eduardo. (1971). Derecho de las obligaciones. Puebla, México
- Ossorio, Manuel. (1994). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Edición: 21 ed. ISBN: 9508850051. Argentina: Editorial Heliasta S.R.L.
- Petit, E. (2014). Tratado elemental de derecho romano. Moca, Dominican Republic: Editora Dalis
- Resolución 04 de septiembre de 2023 Juzgado Séptimo Civil
- Sentencia de la Sala Civil de 12 de septiembre de 2015

INSCRIPCIÓN PROVISIONAL DE ÓRDENES PROFERIDAS POR AUTORIDAD COMPETENTE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Gisel Alejandra Olmedo

Ministerio Público de Panamá

gissy-olmedo@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0064-5699>

DOI: 10.37594/cathedra.n20.1186

Fecha de recepción: 15/09/2023

Fecha de revisión: 25/10/2023

Fecha de aceptación: 05/11/2023

RESUMEN

Las inscripciones provisionales relacionadas a bienes y actos sujetos a registro, tienen su origen en procesos judiciales. Estos procesos tienen por finalidad, el reconocimiento y ejercicio de un derecho sobre los referidos bienes. Los documentos u órdenes judiciales que constituyen materia de registro de forma general son: la demanda, secuestro, embargo y las medidas innominadas o atípicas, así como las órdenes proferidas por el Tribunal de Cuentas.

Palabras clave: Demanda, secuestro, embargo, medidas cautelares, registro público, derecho registral

PROVISIONAL REGISTRATION OF ORDERS ISSUED BY COMPETENT AUTHORITY IN THE PUBLIC REGISTRY OF PANAMA

ABSTRACT

Provisional registrations related to assets and acts subject to registration have their origin in judicial processes. The purpose of these processes is the recognition and exercise of a right over the aforementioned assets. The documents or judicial orders that constitute the subject of registration in general are: the demand, seizure, foreclosure and unnamed or atypical measures, as well as the orders issued by the Court of Accounts.

Keywords: Lawsuit, seizure, embargo, precautionary measures, public registry, registration law.

ÓRDENES JUDICIALES: CONCEPTO Y FUNDAMENTO LEGAL

De forma general, una “orden judicial”, puede definirse como una acción legal emitida un tribunal competente, como consecuencia de una petición de parte interesada que ordena a una de las partes, que debe hacer algo o abstenerse de hacer algo. Una vez que el tribunal toma su decisión, las partes deben acatar el fallo. Si la parte no cumple con la orden judicial, puede haber severas sanciones. Nos referimos a autoridad competente porque también están las órdenes proferidas por

los Magistrados de la Jurisdicción de Cuentas y los Jueces Ejecutores de la Jurisdicción Coactiva.

Las órdenes judiciales pueden ser expedidas en la jurisdicción ordinaria, que de acuerdo al artículo 202 de la Constitución Política de la República de Panamá, la Administración de Justicia es ejercida de una manera permanente, por los tribunales ordinarios que son: la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, los Jueces de Circuito y los Jueces Municipales. (Torres Gudiño, 1954). Asimismo, se enmarcan las medidas cautelares y órdenes expedidas por la Jurisdicción Coactiva y el Tribunal de Cuentas (los denominados Fuera de Comercio) como nos hemos referido anteriormente.

También existen las órdenes judiciales expedidas en la jurisdicción Penal, las cuales son solicitadas por el fiscal de la causa y son autorizadas por el Juez de Garantías que, de forma genérica, se denominan Medidas Cautelares reales: aprehensión provisional de bienes, el secuestro penal y las medidas conservatorias innominadas, las cuales desarrollaremos más adelante.

LA CALIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN DE “ÓRDENES JUDICIALES” EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

El Código Civil en el Título II que desarrolla normas relacionadas con el Registro Público de Panamá, y en su Capítulo V “*De las Incripciones Provisionales*”, específicamente en el artículo 1778, establece una lista “*numerus clausus*” de los tipos de órdenes proferidas por autoridad competente susceptibles de registro:

Artículo 1778. Además de las inscripciones definitivas de que tratan los Capítulos anteriores, habrá también inscripciones provisionales que se harán en las respectivas secciones del Registro Público cuando se trate de los siguientes documentos o actos judiciales:

1. Las demandas sobre dominio de bienes inmuebles y cualesquiera otras que versen sobre propiedad de derechos reales, o en las cuales se pida la constitución, declaración, modificación, limitación o extinción de cualquier derecho real sobre inmuebles;
2. Las demandas sobre cancelación o rectificación de asientos del Registro;
3. Las demandas sobre declaración de presunción de muerte, nombramiento de curador y cualesquiera otras, por las cuales se trate de modificar la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre administración de sus bienes;
4. Los autos de secuestro de bienes raíces. Esta inscripción será válida por el tiempo que dispongan las leyes procedimentales y será cancelada de acuerdo con ellas;
5. El embargo que se haga de bienes raíces;
6. Los títulos cuya inscripción no pueda hacerse definitivamente por faltas subsanables.

Esta inscripción produce los efectos de la inscripción definitiva durante seis meses y quedará de hecho cancelada si dentro de ese término no se subsana el defecto.

Son faltas subsanables la que afecta la validez del título sin producir necesariamente la nulidad de la obligación en él constituida; la de no haberse anteriormente inscrito el dominio o derecho de que se trata a favor de la persona que lo transfiera o grave; la de no haberse hecho la inscripción con todos los requisitos que exige el nuevo sistema de registro, por tratarse de títulos anteriores a la vigencia de la Ley N° 13 de 1913, y no sujetarse el título nuevo a las prescripciones del Código Civil y del Judicial para subsanar esas omisiones, y, en general, todo defecto en la forma del título o en su esencia que, sin invalidarlo por completo, impida su inscripción definitiva.

Este artículo, debe aplicarse en conjunto con el artículo 672 del Código Judicial, el cual dispone, que toda demanda u orden judicial que verse sobre propiedad de bienes inmuebles registrados, deberá indicar los datos de inscripción, los linderos y ubicación correspondientes:

Artículo 672. Si la demanda versa sobre un bien inmueble registrado, se indicarán los linderos y ubicación además de los datos de inscripción correspondientes...

Asimismo, en caso de procesos que afecten bienes susceptibles de registro, el Juzgado deberá acogerse con lo establecido por el numeral 3 del artículo 1227 del Código Judicial:

Artículo 1227. Son comunes en los procesos de conocimiento, las siguientes disposiciones:

1...

2...

3. Tratándose de procesos que afecten bienes inmuebles o muebles susceptibles de registro, el Juez ordenará que, antes de correrse traslado al demandado, se inscriba provisionalmente la demanda. Procede la inscripción provisional de la demanda en el Registro Público, cuando el objeto de ésta sea el reconocimiento y el ejercicio de un derecho real sobre un inmueble o mueble susceptible de registro, siempre que el demandante no haya renunciado o no haya querido ejercer en el momento esta facultad. El Juez, por medio de un oficio, hará saber al Registrador lo siguiente: el nombre de las partes, la identidad del bien, su ubicación y linderos.

Esta inscripción no pone el bien fuera del comercio, pero afectará a terceros adquirentes. No obstante, el Juez ordenará la cancelación de la inscripción provisional, si el demandante desistiera de esta medida o fuere vencido en primera instancia y no preste caución equivalente a la caución de secuestro que correspondería, dentro de los cinco

días siguientes de la resolución dictada.

Cuando la demanda se refiere sólo a parte o cuota parte de una finca, la inscripción provisional únicamente afectará a dicha parte o cuota parte...

La orden judicial deberá ser presentada al Diario del Registro Público, con la finalidad de que la misma sea anotada en el **Libro Diario**, en el que se practican los asientos de presentación de los documentos que se presentan, con el objeto de que la inscripción se realice conservando la preferencia que les corresponda por la fecha y hora de presentación. (Candela Cerdán, 2009) para generar lo que se denomina: **Asiento del Diario** y el mismo, está constituido por dos partes: número secuencial a nivel nacional seguido del año en curso. Por ejemplo: Asiento 1/2014, concordante con lo establecido en el artículo 5 del Decreto N° 28 de 26 de marzo de 1979:

Artículo 5. El ingreso de documentos al Diario a través del sistema de procesamiento de datos, sea en la Ciudad de Panamá o en las agencias regionales, se hará de forma que exista un orden único de presentación a nivel nacional.

En cuanto a las formalidades que debe cumplir el asiento, éste deberá extenderse en la forma establecida en el artículo 39 en el citado Decreto N°9 de 1920 modificado por el Decreto Ejecutivo N°106 de 30 de agosto de 1999:

Artículo 39. En el instante mismo de la presentación, en el Departamento del Diario se extenderá el asiento que contendrá:

1. Número del asiento y tomo de identificación del Diario. El tomo será el año en curso y el asiento corresponderá a un número consecutivo anual.
2. Hora, fecha y lugar de presentación.
- 3...
5. Si se tratare de los documentos a que se refieren los incisos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del artículo 1778 del Código Civil, los nombres del actor y opositor con expresión del cargo que ejerza (Juzgado, circuito, ramo), el nombre del demandado o del dueño de la finca sobre la cual se ha decretado y practicado el secuestro o embargo.
- 6...
11. Si se tratare de cualquier otro documento no contemplado anteriormente, el nombre de las partes involucradas en la operación.
- 7...
12. Número de liquidación.
13. Derecho de registro.
14. Nombre y número de documento de identidad personal del presentante del documento.

15. Nombre del acto o contrato, si lo tuviere, o relación sucinta de su naturaleza.

16. Clave de documento, número y fecha y nombre del funcionario autorizante...

Con los cambios tecnológicos que el Registro Público de Panamá aplicó en el año 2014, el Asiento también es conocido como Entrada; y a continuación, un ejemplo de un asiento o entrada¹ del Registro Público de Panamá en el cual, se puede observar lo establecido por el citado artículo 39:

ENTRADA 1/2014 (0)	
Nº de Entrada / Nº de Asiento	1/2014 (0)
Fecha de Ingreso	02/01/2014 09:48:30 a.m.
Presentante	José Luis Villalaz López
Notario	LIC. JADME EDUARDO GUELLÉN ANGUZOLA
Notaría	NOTARÍA PÚBLICA CUARTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ
Destino	Traspasos y Derechos Reales
Situación Actual	Entregado como Salida sin Registro

Historial de Transmisión	
Resultado	Fecha y Hora
Ingresado Número de Prelación	02/01/2014 09:48:31 a.m.
Ingresado Número de Prelación, Cobrado	02/01/2014 09:49:00 a.m.
Ingresado - Presentada	02/01/2014 10:44:28 a.m.
Recibido en el área y Pendiente de Asignación de Registrador	02/01/2014 01:14:46 p.m.
En Calificación	02/01/2014 06:27:01 p.m.
Listo para Entrega como Salida sin Registro	02/01/2014 06:31:31 p.m.

Una vez hecha la anotación en el Diario, el oficial extenderá enseguida el recibo al presentador; de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Decreto N°9 de 1920 y artículo 11 del Decreto N°28 de 1979.

Se hace importante mencionar, que la sola anotación en el Diario produce efectos contra terceros (Proceso Ordinario: Eugenio Brumwig vs Urbanización Roca, S.A., 1994) por lo que, tiene prelación frente a otras medidas cautelares presentadas con posterioridad, de acuerdo a lo establecido por el artículo 1780 del código civil:

Artículo 1780. La inscripción provisional, como la definitiva, surte efecto respecto de terceros desde la fecha de la presentación del título.

¹ Fuente: Instructivo de la Web, Registro Público de Panamá, año 2014.

https://registro-publico.gob.pa/imagenes/PDF/transparencia/Instructivo_de_la_web.pdf

GENERALIDADES DE LA CALIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES JUDICIALES

De acuerdo al citado Manual de Calificación del Registro Público, los defectos más comunes de las órdenes judiciales son los siguientes:

DEFECTO	FUNDAMENTO LEGAL
Falta el oficio remisorio.	Artículo 536 numeral 1 del Código Judicial, Artículo 988, 989 y 1727 Código Judicial.
Falta datos de inscripción de los bienes inmuebles.	Artículo 1744 Código Civil.
No se citan cuáles son los inmuebles objeto de la medida.	Artículo 1744 Código Civil.
No coincide el nombre señalado del propietario con las constancias registrales.	Artículo 1744 Código Civil. (Secuestros, embargos, remates, demandas)
No coincide el número de cédula del demandado con las constancias registrales	Artículo 1744 Código Civil.
No cita el número y fecha de auto de secuestro que por este medio se eleva a embargo.	Artículo 1744 Código Civil.
Falta la presentación del auto que ordena la medida	Artículo 1759 1756 y 1784 del Código Civil; Artículo 91 del Decreto No.9 de 1920.
Falta la autenticación del auto por el Secretario del Juzgado.	Artículo 1759 Código Civil.
Ya consta inscrito un secuestro o un embargo	Artículo 1800 Código Civil.
Cítese la cuantía de la medida decretada	Artículo 85 del Decreto 9 de 1920. (En materia de familia no es necesario citar cuantía).
Existen asientos pendientes de inscripción sobre el Folio Real.	Artículo 1761 y 1780 del Código Civil.
Las inscripciones provisionales de demandas, requieren copia autenticadas de la demanda. Debe adjuntar Resolución que ordena el embargo, secuestro o medida cautelar debidamente autenticado.	Artículo 1227, numeral 3 del Código Judicial.
Aportar otros documentos complementarios que guarden relación con la entrada principal.	Por ejemplo, falta de planos, paz y salvos.
Exonerado de pago en el Registro Público de Panamá.	Resolución No. 212 de 18 de abril de 2013 (Inscripción de la Medida Cautelar)
Si se secuestra una cuota parte, debe expresamente indicarse así en la resolución judicial.	Artículo 1744 del Código Civil
Si es una cuota parte que recae la demanda sobre uno de los propietarios del bien inmueble, debe ser citado.	Artículo 1227, numeral 3 del Código Judicial
Falta de pago de los derechos de calificación y registro del levantamiento de las medidas cautelares.	Artículo 48 del Decreto Ejecutivo N° 9 de 1920 Resolución No. 212 de 18 de abril de 2013

INSCRIPCIONES PROVISIONALES

Hemos precisado en líneas anteriores, que las órdenes judiciales y las medidas cautelares son inscripciones provisionales, debido a que la anotación de la demanda y demás órdenes, son emanadas por una autoridad competente, cumplen la finalidad de asegurar las resultas de un juicio, advirtiendo a los terceros de la existencia de un procedimiento que puede afectar a las fincas o derechos registrados, asegurando al demandante que el fallo que se dicte podrá ejecutarse en las mismas condiciones existentes al anotarse la demanda. (Manzano Solano, 2008)

Ramos Méndez, en cuanto al asiento relacionado con la anotación o inscripción de la demanda en el Registro Público, lo ha definido como: *“un asiento registral de vigencia limitada temporalmente, que publica la pendencia de un proceso sobre una situación jurídica registrada o registrable”*. (Ramos Méndez, 1990)

En cuanto a la competencia para realizar las inscripciones provisionales, el artículo 87 del Decreto N°9 de 1920, detalla claramente la competencia privativa del Registro Público y a qué Departamento corresponde las inscripciones provisionales de naturaleza jurisdiccional:

Artículo 87. Las inscripciones provisionales a que se refiere el ordinal 1° del artículo 1778 del Código Civil se harán en el mismo Registro en que estuviere inscrito o hubiere de inscribirse el derecho de que se trata.

Artículo 88. Las del ordinal 2° del mismo artículo en el Registro en donde se hallare el asiento de cuya cancelación o rectificación se trate.

Las del ordinal 3°, en el Registro de Personas.

Las del ordinal 4° y 5°, en el Registro de la Propiedad.

Las del ordinal 6° en el Registro en donde hubiere de practicarse la inscripción definitiva que se suspende.

El Departamento de Órdenes Judiciales, Fiscales y Administrativas (DOJUFA)², en primera instancia, es el encargado de inscribir las medidas cautelares y órdenes judiciales, sin embargo, también intervienen por ejemplo el Departamento de Bienes Muebles, Departamento de Personas Jurídicas y Naturales y el Departamento de Bienes Inmuebles (Sección de Propiedad Horizontal, Sección de Traspasos y Derechos Reales, Sección de Registro Inmobiliario y Concesiones) con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por las autoridades competentes, y que verse sobre bienes inmuebles, muebles, situación jurídica de personas jurídicas y naturales, bienes inmuebles incorporados al Régimen de Propiedad Horizontal y el traspaso por orden judicial.

2 Resolución N°JD-003-2022 de 27 de enero de 2022. Estructura Organizativa del Registro Público de Panamá.

De acuerdo al Manual de Calificación del Registro Público de Panamá³:

- **Las Demandas:** declaración de presunción de muerte, nombramiento de curador y cualesquiera otras, por las cuales se trate de modificar la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre administración de sus bienes. Por otro lado, es importante traer a colación aquellas demandas provisionales, dictadas en los procesos que no son materia de inscripción Registral, entre estos tenemos la Demandas, Secuestros o Embargos, que afecten Personerías Jurídicas. En estos casos, tenemos que explicar que, en DOJUFA, es necesario afectar los Folio Reales, los cuales se refieren a bienes inmuebles y las Personería Jurídicas no son bienes inmuebles que ameriten un fuera de comercio.
- **Medidas Cautelares en materia Civil:** consiste en la aprehensión de los bienes del demandado, poniéndolos fuera del comercio, evitando así que éste trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o disipe los bienes que posea y con los cuales se garantiza el eventual resultado del proceso. Existen documentos dentro de las Medidas cautelares, que no son materia de inscripción, como lo son: contra sociedades en sí mismas, salvo procesos penales (Departamento de personas jurídicas).
- **Secuestro y Embargo.** Regulado en los artículos 533 y siguientes del Libro Segundo del Código Judicial, es una medida cautelar de carácter judicial dispuesta contra los bienes o derechos del deudor, a fin de garantizar el cumplimiento de una obligación. Tal y como lo dispone el mismo artículo 533, tiene como finalidad *“evitar que el proceso sea ilusorio en sus efectos y que la parte demandada trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o disipe los bienes muebles o inmuebles que posea”*. El demandante podrá pedir, antes de presentada la demanda o después de presentada, es decir, en cualquier estado del proceso ya sea ORDINARIO O ESPECIAL, el depósito de ellos en manos de un depositario que nombrará el Tribunal.

Según el artículo 85 del Decreto 9 de 13 de enero de 1920 *“ Las inscripciones provisionales a que se refieren los ordinales 1, 2, 3, 4, y del artículo 1778 del Código Civil, consistirán en una constancia de haberse entablado demanda, o bien decretado o practicado secuestro o embargo con indicación de los nombres, del acto y del demandado, objeto de la demanda o del embargo, en su caso y de la cantidad por la cual éste se hubiere decretado o ejecutado y cita del asiento de presentación del documento ”*.

3 Resolución N°DG-028-2019 de 28 de mayo de 2019. Manual de Calificación.

El numeral 4 del artículo 1778 Código Civil dispone lo siguiente:

Artículo 1778. Además de las inscripciones definitivas de que tratan los Capítulos anteriores, habrá también inscripciones provisionales que se harán en las respectivas secciones del Registro Público cuando se trate de los siguientes documentos o actos judiciales:

1...

4. Los autos de secuestro de bienes raíces. Esta inscripción será válida por el tiempo que dispongan las leyes procedimentales y será cancelada de acuerdo con ellas...

En términos generales, el secuestro y embargo, en la materia Civil se regulan dentro de las medidas cautelares del Libro II del Código Judicial (artículo 531 y siguiente). Respecto a su inscripción en el Registro Público, es fundamental tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 1778 Código Civil, sobre inscripciones provisionales y por el Capítulo VII de la Ley No. 9 de 1920 (artículo 85 a 90).

- **Medidas Conservatorias o de Protección en General** también denominadas medidas innominadas o atípicas y son establecidas en el artículo 569⁴ del Código Judicial y son pedidas al Juez por la persona a quien asista un motivo justificado para temer que antes de proferirse la sentencia, sus pretensiones no podrán ser satisfechas y su objetivo, es asegurar provisionalmente los efectos de dicha sentencia.
- **Tribunal de Cuentas de acuerdo a la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008** en su artículo 27

Las medidas cautelares son aquellas que se adoptan con la finalidad de garantizar los resultados del proceso; en el caso específico del Proceso de Cuentas, estas se aplican con la finalidad de evitar en el evento de proferirse una Sentencia de Cargos, que las pretensiones del Estado de recuperar aquellos fondos o bienes públicos malversados o mal habidos, sean ilusorias. (Girado, 2014)

Esta medida cautelar podrá ser decretada:

1. Sobre todo o parte del patrimonio de las personas investigada o procesadas.
2. Sobre los bienes respecto de los cuales, a pesar de que no figuren como parte del patrimonio del investigado o procesado, existan indicios de bienes, fondos o valores sustraídos indebidamente del Patrimonio del Estado.

⁴ Restablecida su vigencia por la Ley N° 119 de 10 de diciembre de 2019.

A través del Tribunal de Cuentas, se juzgan las cuentas de los agentes y servidores públicos de manejo cuando surjan reparos por razón de supuestas irregularidades. Cuando se trata de la Inscripción de la Medida Cautelar los documentos ingresados al Registro Público deben contar con:

1. La resolución de reparos debe estar dirigida al Registro Público.
2. La fecha del oficio remisorio y de la resolución puede ser la misma, o el oficio debe presentar fecha posterior a la de la resolución.
3. Se debe adjuntar la resolución que nos remite oficio.
4. La resolución debe ser original o también puede presentar sello de autenticidad.
5. Se debe citar los nombres y números de cédulas de las personas investigadas.

En las resoluciones del Tribunal de Cuentas, no se citan los bienes inmuebles, el calificador debe investigar si él o los procesados tienen propiedades a un nombre y las mismas deben se afectadas con la entrada que se trabaja.

El Tribunal de Cuentas, hace declinación de competencia a la Dirección General de Ingresos. El artículo 84 de la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008. “Después de dos meses de ejecutoriada la Resolución de Cargos, o su acto confirmatorio, el Tribunal de Cuentas remitirá copia de esta, al igual que la de las medidas cautelares dictadas, a la Dirección General de Ingreso del Ministerio de Economía y Finanzas para que proceda a hacerla efectiva mediante los trámites del proceso por cobro coactivo. Deben citar la resolución que ordenó la medida para la declinación de competencia. La Declinación no supone traspaso de título al Ministerio de Economía y Finanzas.

- **Secuestro Penal.** Con relación al Secuestro Penal, éste se regula en el Libro II Título II del Código Judicial, el cual surte efectos poniendo el bien fuera de comercio, por el tiempo que dure el proceso porque existe un peligro de la eventual disposición de una cosa relacionada con el delito.⁵
- El Título V, Capítulos II y III, Sección 1ª, Sección 2ª del Código Procesal Penal⁶ con el nuevo Sistema Penal Acusatorio (SPA), varía este procedimiento, pues el Artículo 268 del Código Penal, establece nuevos lineamientos para la formalización de esta medida.

Únicamente los agentes de instrucción pueden pedir el secuestro penal a los jueces de la causa, significa que, los querellantes solo pueden solicitarlo al funcionario del Ministerio Público, para que este se lo pida al juez correspondiente. Cuando se trata bienes inmuebles, se inscribe en

⁵ Artículo 2051 del Código Judicial.

⁶ Artículos 252, 259, 262, 268, 270 del Código Procesal Penal.

el Registro Público de Panamá la medida dictada por el juez correspondiente, para que se impida cualquier acto de comercio o transacción de cualquier naturaleza sobre el bien inmueble. Los jueces de garantía son los llamados a conocer este tipo de medidas cautelares, lo remite al registro público mediante oficio en diversas ocasiones o presentado el acta de audiencia citando el bien inmueble a secuestrar.

Artículo 259 de la Ley 63 de 2008 *“Cuando las exigencias cautelares de la investigación penal así lo requieran, el Juez de Garantía a solicitud del Fiscal podrá decretar el secuestro penal, sin más trámite, de las cosas relacionadas con el delito para evitar el peligro de la eventual disposición, desaparición o destrucción de los bienes sujetos a comiso”.*

Es preciso mencionar, que el secuestro penal debe guardar el orden de prioridad establecido por las normas que regulan la actividad registral y el artículo 252 del Código Penal, **Aprehensión provisional**. Serán aprehendidos provisionalmente por el funcionario de instrucción: los instrumentos, los bienes muebles e inmuebles, los valores y los productos derivados o relacionados con la comisión de delitos contra la administración pública, de blanqueo de capitales, financieros contra la propiedad intelectual, seguridad informática, extorsión, secuestro, pandillerismo, sicariato, terrorismo y financiamiento del terrorismo de narcotráfico y delitos conexos, contra la trata de personas y delitos conexos, delincuencia organizada, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos y quedarán a órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas hasta que la causa sea decidida por el juez competente.

Cuando resulte pertinente, la orden de aprehensión provisional será inscrita en el Registro Público o municipio, según proceda. La aprehensión provisional puede recaer sobre vehículos de motor, naves o aeronaves, bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible, el juez competente, previa opinión del funcionario instructor, podrá designar como depositarios a sus propietarios, otorgándoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta que se decida la causa. Cuando la aprehensión se haga sobre la empresa o negocios con dos o más propietarios o accionistas, esta recaerá sobre la parte que se tiene vinculada de manera directa o indirecta con la comisión de los delitos establecidos en este artículo y siempre se hará respetando los derechos de terceros afectados con esta medida.

Medidas Conservatorias Innominadas⁷: cuando existan motivos justificados para temer que, mientras dure el proceso, puedan continuar las situaciones que facilitan la comisión del delito,

⁷ Artículo 270 del Código Procesal Penal.

a solicitud de parte y con prueba suficiente, el Juez podrá ordenar medidas conservatorias, de protección o de suspensión apropiadas, según las circunstancias, para prevenir los efectos del delito.⁵

Podemos concluir que las inscripciones provisionales mantienen características importantes:

I. Si bien es cierto, las órdenes judiciales deben inscribirse en el Registro Público, rige el principio de prioridad, es decir que, si se ha presentado al diario con anterioridad otra medida sobre el mismo bien, hasta tanto no se resuelva la situación registral de ese documento, mal podría tener lugar la inscripción del último que se presenta para inscripción. (Auto de 5 de mayo de 1986) (Auto de 5 de diciembre de 1938)

II. La inscripción provisional impide inscripciones posteriores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1800 del Código Civil:

Artículo 1800. No se registrará instrumento alguno que transmita, modifique o limite el dominio de bienes inmuebles, o naves, ni el en que se constituya, modifique o extinga algún derecho de hipoteca u otro gravamen sobre los mismos, cuando subsista alguna inscripción provisional relativa al inmueble o naves mencionados en el instrumento presentado al Registro.

III. Son inscripciones de carácter temporal de acuerdo a lo establecido en los artículos 92 y 93 del Decreto Ejecutivo N°9 de 1920:

Artículo 92. Además de los casos señalados en los incisos 4°, 5° y 6° del artículo 1778 del Código Civil, no será necesario asiento de cancelación, y caducará por el solo transcurso del tiempo la inscripción de un derecho temporal, haciéndolo constar así por simple anotación.

Artículo 93. La inscripción provisional, cuando se refiere al título con defectos subsanables, quedará cancelada por el hecho de dejar transcurrir los términos de la ley sin corregir los defectos del título.

IV. La característica principal de este tipo de inscripciones es que provoca el cierre del Registro a los actos dispositivos relativos a la finca o derecho(s) afectado(s) por la anotación o por la prohibición otorgados con posterioridad a la misma, que no podrán ser inscritos o anotados.

¿CUÁNDO UNA INSCRIPCIÓN PROVISIONAL SE CONVIERTE EN DEFINITIVA?

Podemos indicar de forma general, que la inscripción provisional se convierte en definitiva cuando se presente al Registro Público la sentencia ejecutoriada, es decir la decisión que dirime la

controversia:

Artículo 1779. Las inscripciones provisionales a que se refieren los casos 1, 2 y 3 del artículo anterior, se convierten en definitivas mediante la presentación en el Registro de la respectiva sentencia ejecutoriada.

La del caso 6 cuando se subsane el defecto dentro de los seis meses prefijados, o desaparezca el motivo por el cual no se hizo la inscripción definitiva.

La inscripción definitiva genera el efecto jurídico propio de ella y mientras subsista no se puede revocar mutuo propio por el registrador (González, 2019) y en el caso objeto de estudio, requiere resolución judicial ejecutoriada que la declare.

LEVANTAMIENTO DE LAS ÓRDENES JUDICIALES INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO

En el levantamiento de la medida, con solo mencionar auto que ordena levantar el oficio cuando es demanda, no es necesario la mención del bien inmueble.

Es importante destacar, que el interesado en liberar el bien inmueble del secuestro debe solicitar al Juez de la causa que deje sin efecto el Oficio y la Resolución que ordenó la cautelación.

Cuando se trate del levantamiento de la medida cautelar:

1. En la resolución de levantamiento debe citarse el auto, fecha de la resolución que decretó la medida y la finca (si es propiedad raíz o apartamento-PH),
2. Cada finca debe pagar B/.25.00, y
3. En los casos que el procesado no tenga fincas a su nombre, igual debe hacer el pago de B/.25.00 (usualmente en los procesos adelantados por el Tribunal de Cuentas, los llamados fuera de comercio).

LA INSCRIPCIÓN JUDICIAL POR INSISTENCIA

El artículo 19 del Decreto Ejecutivo N° 106 de 1999, creó una nueva figura la cual denominó nuestra máxima corporación de justicia como “*inscripción judicial por insistencia*”:

Artículo 19. Una vez remitida la información de los defectos a la autoridad judicial que emite la comunicación judicial objeto de la calificación, si este reitera la orden de inscripción del documento, el Registrador procederá por insistencia y bajo la responsabilidad de la autoridad judicial respectiva.⁸

⁸ Declarado Nulo Ilegal mediante Auto de 22 de diciembre de 2008 de la Sala III de lo Contencioso Administrativo.

El artículo 19, declarado **nulo, por ilegal** por la Corte Suprema de Justicia, permitía con la insistencia de la autoridad judicial:

- Obligar al registrador a realizar la inscripción de una orden judicial calificada como **defectuosa**,
- Inscribir una orden judicial a pesar, de ser contraria al **principio de prelación registral**,
- Inscribir definitivamente una orden judicial inscrita de forma provisional (vigencia de 6 meses) cuando en la misma aún, **no ha subsanado los defectos** advertidos por el registrador, pero por insistencia de autoridad judicial se realizaría desconociendo el efecto de los artículos 1778, numeral 8 y 1784 del Código Civil.
- Que se cancelara una inscripción por la simple insistencia de la autoridad judicial, **obviando subsanar los defectos** advertidos por el registrador y,
- La responsabilidad producto de la inscripción por insistencia recaía sobre la Autoridad Judicial, es decir, los daños y perjuicios que esta orden pudiese causar a terceros.

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia constató la ilegalidad del citado artículo 19, debido a que la misma vulneraba lo establecido en los artículos 1761, numeral 6 del artículo 1778, 1784 del Código Civil y artículo 111 del Decreto N°9 de 13 de enero de 1920. Además, dicha normativa prevé un mecanismo que no se encuentra regulado en la Ley, por lo cual no le era permitido al Órgano Ejecutivo crearlo basado en su potestad reglamentaria.

CONCLUSIONES

La inscripción provisional de una orden proferida por autoridad competente sobre bienes y actos susceptibles de registro, es un mecanismo eficiente para asegurar las posibilidades de ejecución de un fallo, pero que todavía no puede ser inscrito.

Para concluir, lo más importante a destacar de las inscripciones provisionales es “*su duración temporal o transitoria, consecuencia de que su finalidad es publicar derechos, acciones y situaciones jurídicas también provisionales, determinadas por la Ley.*” (Pau Pedrón, 2003)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Libros

- Barrios González, B. (2011). Allanamiento, Registro y Secuestro en el Proceso Penal. WordPress. Recuperado de <https://borisbarriosgonzalez.files.wordpress.com/2011/08/allanamiento-registro-y-secuestro-en-el-proceso-penal-boris-barrios-gonzalez.pdf>
- Candela Cerdán, J. (2009). Manual para Técnico Documental en Notarías, Tomo I, 2da. Edición, Tema 27. El Registro de la Propiedad. Libros, Asientos y Notas. Documentación Auténtica y la Calificación Registral. El Asiento de Inscripción. Clases de Asientos. Notas Marginales. España.
- Candela Cerdán, J. (2009). El registro de la propiedad. Libros, Asientos y notas. Documentación auténtica y la calificación registral. El asiento de inscripción. Clases de asientos. Notas marginales <https://vlex.es/vid/tema-27-registro-propiedad-554715246>
- Espinosa González, J. J. (2019). Los Derechos Reales en el ordenamiento jurídico panameño. Volumen III. Centro de Investigación Jurídica, Facultad de Derecho, Universidad de Panamá. Recuperado de <https://centroinvestigacionjuridica.up.ac.pa/sites/centroinvestigacionjuridica/files/publiEspecial/dero.pdf>
- Girado, J. C. (2014). Las Medidas Cautelares en el Proceso de Cuentas. Tribunal de Cuentas. Recuperado de <https://tribunaldecuentas.gob.pa/documentos/14-MEDIDAS-CAUTELARES-Jean-Carlos-Girado.pdf>
- Manzano Solano, A., y otros. (2008). Instituciones de Derecho Registral Inmobiliario. Fundación Registral, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid.
- Pau Pedrón, A. (2003). Elementos de Derecho Hipotecario. Editorial Universidad Pontificia Comillas, Madrid.
- Ramos Méndez, F. (1990). Derecho Procesal Civil. Editorial José M. Bosch, Barcelona.
- Registro Público de Panamá. (2014). Instructivo de la Web. Recuperado de https://registro-publico.gob.pa/images/PDF/transparencia/Instructivo_de_la_web.pdf
- Torres Gudiño, S. (1954). Panorama del Derecho Procesal Civil Panameño. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- Van Eps, J. (2013). Registro Público de Panamá, Cuarta Edición. Centro de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá.

Leyes

- Constitución Política de la República de Panamá.
- Código Civil de la República de Panamá.
- Código Judicial de la República de Panamá.

- Código Procesal Penal de la República de Panamá.
- Decreto N°9 de 13 de enero de 1920. Por la cual se reglamenta el Registro Público. G.O. 3285 de 2 de febrero de 1920.
- Ley N°43 de 13 de marzo de 1925. Sobre Reformas Civiles. G.O. 4622 de 25 de abril de 1925.
- Decreto N°31 de 29 de marzo de 1978. Por el cual se modifica el Decreto N°9 de 13 de enero de 1920 sobre Registro Público. G.O. 18747 de 23 de enero de 1979.
- Decreto N° 28 de 26 de marzo de 1979. Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Diario del Registro Público mediante el Sistema de Procesamiento Electrónico de Datos. G.O. 18795 de 2 de abril de 1979.
- Decreto Ejecutivo N° 106 de 30 de agosto de 1999. Se modifican disposiciones de los Decretos Ejecutivos N° 9 de 13 de enero de 1920, N° 31 de 29 de marzo de 1978, N° 28 de 26 de marzo de 1979, N° 29 de 26 de marzo de 1979, N° 62 de 10 de junio de 1980, N° 203 de 1 de diciembre de 1982, N° 102 de 5 de octubre de 1983, N° 230 de 3 de diciembre de 1998 y se dictan otras disposiciones. G.O. 23878 de 3 de septiembre de 1999.
- Ley 67 del 14 de noviembre de 2008. Que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas y reforma la Ley 32 de 1984, orgánica de la Contraloría General de la República. G.O. 26169 de 20 de noviembre de 2008.
- Ley N°121 de 31 de diciembre de 2013. Que reforma el Código Penal, Judicial y Procesal Penal y adopta medidas relacionadas con el delito delincuencia organizada. G.O. 27446-B de 03 de enero de 2014.
- Decreto Ejecutivo N°847 de 20 de octubre de 2014. Que ordena utilizar el Sistema Electrónico de Inscripción Registral (SIR) basado en la técnica del Folio Electrónico incorporando el uso de la Firma Electrónica reconocida, para todas las operaciones y procedimientos registrales que deban efectuarse en el Registro Público de Panamá. G.O. 27647 de 21 de octubre de 2014.
- Ley N° 119 de 10 de diciembre de 2019. Que restablece la vigencia de un artículo del Código Judicial relativo a las medidas conservatorias o de protección en general. G.O. 28917-B de 10 de diciembre de 2019.
- Resolución N°DG-028-2019 de 28 de mayo de 2019. Por la cual se aprueba el Manual de Calificación. G.O. 28786-A de 31 de mayo de 2019.
- Resolución N°JD-003-2022 de 27 de enero de 2022. Por la cual se aprueba la Estructura Organizativa desarrollada en el Manual de Organización y Funciones del Registro Público de Panamá. G.O. 29469-A de 03 de febrero de 2022.

Sentencias de la Corte Suprema de Justicia

- Auto de 05 de diciembre de 1938, Corte Suprema de Justicia, Registro Judicial N°12, pág. 1964
- Auto de 05 de mayo de 1986, Corte Suprema de Justicia, Registro Judicial, mayo 1986, pág. 1
- Auto de 09 de agosto de 1994, Sala Primera de lo Civil, Magistrado Ponente: Carlos Lucas López.
- Consulta de Ilegalidad. 22 de diciembre de 2008, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Magistrado Ponente: Winston Spadafora.

EL JUEZ DE CUMPLIMIENTO COMO GARANTE DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PRIVADO DE LIBERTAD EN EL PROCESO PENAL

Luis G. Peñalba R.

Universidad de Panamá

Centro Regional Universitario de Veraguas

Facultad de Derechos y Ciencias Políticas. Panamá

luisgp242526@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-4679-8188>

DOI: 10.37594/cathedra.n20.1182

Fecha de recepción: 03/10/2023

Fecha de revisión: 15/10/2023

Fecha de aceptación: 30/10/2023

RESUMEN

El Juez de Cumplimiento desempeña un papel de vital importancia en el Sistema de Justicia Penal, ya que, se encarga de salvaguardar y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Su función principal consiste en supervisar el adecuado cumplimiento de las penas impuestas a los condenados y ver que se respeten todos sus derechos fundamentales mientras estén reclusos. En un entorno en el que la privación de libertad puede ser una forma restrictiva y potencialmente invasiva de los derechos individuales, es de suma importancia contar con una autoridad imparcial y responsable que garantice que las condiciones de encarcelamiento no comprometan los principios fundamentales de dignidad, igualdad y justicia. Desempeña un papel de vigilancia y control que busca evitar abusos, maltratos y tratos crueles e inhumanos en el contexto penitenciario. Asimismo, este juez se convierte en un garante de la resocialización y reinserción social de los reclusos, promoviendo programas y medidas que contribuyan a reintegración exitosa en la sociedad una vez cumplida su condena. Esto implica un enfoque rehabilitador que busca no solo castigar al delincuente, sino también ofrecer oportunidades para la corrección de conductas y la preparación para una vida en libertad más responsable y productiva. Esto incluye la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el acceso a la atención médica adecuada, la comunicación con el exterior y el acceso a la justicia. Sin embargo, esta labor no está exenta de desafíos, como la sobrepoblación de las cárceles, la falta de recursos, la corrupción y la influencia de grupos criminales dentro de las prisiones. A través de este artículo de ensayo se reconocer que el Juez de Cumplimiento es una figura independiente y valiente, dispuesta a enfrentar obstáculos para proteger los derechos humanos de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y reclusión.

Palabras clave: derechos humanos, juez de cumplimiento, privados de libertad, proceso penal.

THE COMPLIANCE JUDGE AS GUARANTEE OF RESPECT FOR THE HUMAN RIGHTS OF THE PRIVATE OF LIBERTY IN THE CRIMINAL PROCESS

ABSTRACT

The Compliance Judge plays a vitally important role in the Criminal Justice System, since he is responsible for safeguarding and guaranteeing the human rights of people deprived of liberty. Its main function is to supervise the proper compliance of the sentences imposed on those convicted and to see that all their fundamental rights are respected while they are detained. In an environment where deprivation of liberty can be a restrictive and potentially invasive form of individual rights, it is of utmost importance to have an impartial and responsible authority that ensures that conditions of imprisonment do not compromise the fundamental principles of dignity, equality and justice. It plays a role of surveillance and control that seeks to prevent abuse, mistreatment and cruel and inhuman treatment in the prison context. Likewise, this judge becomes a guarantor of the resocialization and social reintegration of prisoners, promoting programs and measures that contribute to successful reintegration into society once their sentence has been completed. This implies a rehabilitative approach that seeks not only to punish the offender, but also to offer opportunities for the correction of behavior and preparation for a more responsible and productive life in freedom. This includes the prohibition of torture and cruel, inhuman or degrading treatment, access to adequate medical care, communication with the outside world and access to justice. However, this work is not without challenges, such as prison overcrowding, lack of resources, corruption, and the influence of criminal groups within prisons. Through this article it is recognized that the Compliance Judge is an independent and brave figure, willing to face obstacles to protect the human rights of those who find themselves in a situation of vulnerability and imprisonment.

Keywords: human rights, compliance judge, prisoners, criminal process.

DESARROLLO

En primera instancia se define la palabra Juez y esta es expuesta por diversos autores como aquella figura revestida de autoridad y en cumplimiento de sus funciones o deberes. Couture (1960) citado por Colmenares (2012) define la palabra juez como *“magistrado integrante del Poder Judicial, investido de la autoridad oficial requerida para desempeñar la función jurisdiccional y obligado al cumplimiento de los deberes propios de la misma, bajo la responsabilidad que establecen la Constitución y las leyes”* (p. 68).

Y por último y no menos importante Cabanellas citado por Lasso (2017) dice que es aquel *“que posee autoridad para instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y ejecutar el fallo en un pleito o causa. Persona u organismo nombrado para resolver una duda o un conflicto”* (p. 98).

De acuerdo con Ciocchini (2019)., define la figura del juez de la siguiente manera *“provee justicia a través de sus sentencias, ya sea castigando o absolviendo a quienes han sido acusados, cuya función esta relacionada con la de controlar la legalidad de la investigación policial, protegiendo a la sociedad del abuso del poder estatal”* (p. 2).

Las definiciones proporcionadas por diferentes autores convergen en la caracterización del juez como una figura revestida de autoridad y poder en el ámbito judicial, que está obligado al cumplimiento de sus deberes bajo la responsabilidad establecida por la Constitución y las leyes. Además, se resalta su papel central en instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y ejecutar fallos en pleitos o causas. Cabe destacar, que es un actor clave en el sistema judicial, encargado de administrar justicia, tomar decisiones imparciales y garantizar el cumplimiento de la ley en la resolución de conflictos legales.

Para ampliar se expone el significado de garante que según Peña (2019) el término *“garantir”* en francés y *“garantizar”* en español comparten la misma raíz germánica *“waren”*, que se refiere a la acción de hacerse responsable de algo o de asegurar una obligación. En el contexto jurídico y contractual, el concepto de garantía se basa en la promesa o compromiso de asumir la responsabilidad de cumplir. En este sentido, el garante es aquel que asume la responsabilidad o se compromete a cumplir con las obligaciones de otro en caso de que este último no pueda hacerlo. El término *“garante”* se usa comúnmente en situaciones como garantías financieras, garantías de productos o servicios, garantías legales, entre otras.

Ahora sí se define Juez de Cumplimiento que acuerdo con la normativa panameña, es decir del Código Procesal Penal y el Código Penal citado por González (2018) *“se define como “el Juez responsable de la fase de ejecución de la pena, tiene como misión resolver todas aquellas solicitudes que se presenten en esta etapa a través de audiencia con la presencia de un Fiscal y un defensor”* (p. 5). Cumple un rol importante como allí el auto lo explica en la fase de ejecución de la pena.

El juez de cumplimiento tiene bajo su responsabilidad una serie de competencias que se establecen en *“el artículo 46 del Código Procesal Penal”* (González, 2018). En base a ello a continuación, se expone cada, que este tiene a su cargo:

- Aplicación de las penas y todas aquellas medidas de seguridad.
- *“El cumplimiento, el control y la supervisión para que sea efectivo el régimen impuesto en los procesos suspendidos a prueba, la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de cualquier subrogado penal”* (González, 2018). Debe velar por que se cumpla

con lo establecido en los procesos bajo su supervisión.

- “*El proceso de rehabilitación en los supuestos de interdicción de derechos*” (González, 2018).
- Velar por que se respeten los derechos de la persona sentenciada, para que no se incumpla con lo establecido en dicha sentencia.
- Por último, también velar porque se cumpla con los procesos y programas de rehabilitación social del sentenciado.

Es alentador observar cómo la ley otorga al Juez de Cumplimiento una función primordial en el cumplimiento de penas y medidas de seguridad, así como la supervisión y control de regímenes establecidos para casos de procesos suspendidos a prueba y otros mecanismos penales sustitutivos. El hecho de incluir la responsabilidad del juez en el proceso de resocialización y rehabilitación de los sancionados muestra una clara preocupación por el aspecto de resocialización, lo cual resulta esencial para abordar la reintegración de los individuos a la sociedad tras cumplir sus penas. Este enfoque puede tener un impacto positivo para la minimización de la reincidencia delictiva y de igual forma para la promoción de la reinserción social.

Un punto clave resaltado en este artículo es la importancia de proteger los derechos fundamentales de los sancionados durante la ejecución de penas y medidas de seguridad. Este enfoque demuestra un firme compromiso con el respeto a los derechos humanos, garantizando que la pena impuesta se ajuste a lo establecido en la sentencia y que el trato otorgado sea digno y equitativo. La resolución relativa a la implementación de programas y el seguimiento del proceso de resocialización también refleja una actitud proactiva para evaluar el avance de los sancionados y ajustar los programas de acuerdo con sus necesidades individuales. Esto puede aumentar la efectividad del proceso de rehabilitación y mejorar las posibilidades de una reintegración exitosa.

El juez de cumplimiento en Panamá desempeña un rol crucial en la supervisión y control de la ejecución de penas y medidas privativas de libertad. Su función es que se garantice el respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentran encarceladas, por lo tanto, también que se asegure el cumplir con los estándares internacionales que se estableció por el Sistema Interamericano y de Naciones Unidas.

El principal rol del juez de cumplimiento es velar por el debido proceso y la legalidad en la ejecución de las penas y medidas. Algunas de las responsabilidades específicas del juez de cumplimiento incluyen:

- Supervisar el tratamiento de los reclusos: El juez de cumplimiento debe asegurarse de

que los reclusos reciban un trato humano y digno, evitando la tortura, el maltrato y las condiciones inhumanas en los centros penitenciarios.

- Evaluación del progreso de la pena: Es función del juez de cumplimiento evaluar el avance de la pena y determinar si un recluso ha cumplido con los requisitos para acceder a beneficios penitenciarios, tales como la libertad condicional o la reducción de pena por trabajo o estudio.
- Control del sistema penitenciario: El juez de cumplimiento debe realizar inspecciones periódicas a los centros de detención para verificar el cumplimiento de las normas y estándares establecidos, asegurando que se ofrezcan condiciones adecuadas para la rehabilitación y reinserción social de los reclusos.
- Resolución de conflictos: El juez de cumplimiento es responsable de resolver cualquier conflicto o disputa que surja en relación con la ejecución de las penas, asegurando que se respeten los derechos de los reclusos y se apliquen las normas establecidas.
- Implementación de programas de reinserción: El juez de cumplimiento debe colaborar con otras entidades y organizaciones para implementar programas efectivos de rehabilitación y reinserción social de los reclusos, buscando reducir la reincidencia delictiva.

En términos generales, este artículo muestra cómo el sistema de justicia penal en Panamá se enfoca en la justicia restaurativa y la resocialización de aquellos individuos que han violado la ley. Asignar al Juez de Cumplimiento un papel clave en estas áreas es un paso positivo para lograr un sistema de justicia más equitativo y humano.

El Órgano Judicial como máxima instancia judicial del país, desempeña un papel fundamental en la administración de justicia, resolviendo conflictos legales, aplicando la ley y garantizando el debido proceso en el sistema legal del país, el mismo describe las funciones del Juez de cumplimiento así:

- Inspección de los centros penitenciarios, con el fin de velar que se cumpla con lo establecido para mantener así un control.
- Intervenir en cualquier situación o asunto que se presente en el tiempo en el que se ejecute la sentencia.
- Con respecto al punto anterior, se encarga también de dictar las medidas necesarias para corregir dicha situación.
- *“Controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la suspensión del procedimiento y la suspensión condicional de la ejecución de la pena.”* (González, 2018, p. 21). Después de ello se remite al Juez de Garantía para que este se encargue de revocar o la extinción de cualquier acción penal.

- Asume la responsabilidad del proceso de rehabilitación.
- Sustitución de la pena hasta un 30%, en casos que estén previstos en la normativa.
- Velar por el respeto de los derechos durante la ejecución de la pena.
- Realizar el computo de la pena, fijando la fecha en que finalizará la condena.
- Unificar las penas o condenas en los casos previstos en el Código Penal. Tareas afines al cargo y que determine la ley.

Las funciones del Juez de Cumplimiento, tal como se exponen en el texto, destacan la importancia crucial que tiene esta figura en el sistema de justicia penal del país. Estas responsabilidades son fundamentales para asegurar una ejecución efectiva de las penas y medidas de seguridad, además de garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en procesos suspendidos a prueba y otros mecanismos penales sustitutivos.

Uno de los roles más importantes del Juez de Cumplimiento consiste en realizar inspecciones y visitas a los establecimientos penitenciarios, además de convocar a sancionados o responsables de dichos lugares. Esta actuación evidencia un enfoque en la vigilancia y control para garantizar el respeto de los derechos de los sancionados y la correcta y transparente operación del sistema penitenciario. Asimismo, la facultad del Juez de Cumplimiento para resolver los asuntos que se presenten durante la ejecución de la sentencia y dictar medidas correctivas denota una preocupación por preservar el debido proceso y abordar posibles deficiencias en el sistema. Esto es crucial para garantizar la justicia y el respeto a los derechos de todos los involucrados.

El enfoque en el control del cumplimiento de la ejecución de la pena muestra un claro compromiso con una supervisión efectiva y la posibilidad de revocación en caso de incumplimiento. Como se observa en los subpuntos el Juez de Cumplimiento asume la responsabilidad del proceso de rehabilitación. Esta acción enfatiza el reconocimiento de que la reinserción social es un objetivo relevante del sistema de justicia penal y expone la importancia de que la rehabilitación un esencial para que existan un proceso integral que se enfoque en evitar el aumento de la reincidencia.

Por último, la responsabilidad en la aplicación de programas, demuestra una actitud proactiva para evaluar el progreso de los sancionados y ajustar los programas según sus necesidades individuales. Este enfoque puede tener un impacto positivo en la efectividad del proceso de reintegración y en la reducción de la reincidencia delictiva. En conjunto, las funciones del Juez de Cumplimiento descritas en el texto son fundamentales para asegurar un sistema de justicia más equitativo.

En un folleto en el web presentado por el Órgano Judicial (2019) expone los tipos más

comunes de audiencia las cuales son:

- Para establecer el trabajo comunitario, para que ello se establezca la pena no debe de exceder a un lapso de cinco años. (Artículo 65. Código Penal, 2007)
- Cuando se fijan las condiciones para la libertad vigilada (Artículo 104. Código Penal, 2007)
- Cuando se condene a menos de cuatro años de prisión es decir en caso de que se requiera para reemplazo de penas cortas: (artículo 102, 112 Código Penal, 2007).
- “Artículo 99. La suspensión condicional de la ejecución de la pena será revocada por el Juez de Cumplimiento” (Código Penal, 2007).
- “Aplazamiento y sustitución de la ejecución de la pena principal (prisión domiciliaria o prisión hospitalaria)” (artículo 64, 108 -112. Código Penal, 2007)

El Código de Ética Judicial Panameño es una iniciativa coherente con la función jurisdiccional y la investidura judicial, además de responder a la demanda ciudadana de contar con un órgano judicial honesto, imparcial, independiente, idóneo y justo, que garantice el principio de legalidad y los derechos constitucionales de las personas. El texto también hace mención de la Ley 6 de 2002, que establece la obligación para todas las agencias y dependencias del Estado, incluido el Órgano Judicial, de tener Códigos de Ética para el adecuado desempeño de la función pública.

En el Acuerdo N°532 (2008) se expone que el proceso de elaboración del Código de Ética Judicial de la República de Panamá contó con la participación de una Comisión Nacional representativa y diversa, basándose en el Código Modelo Iberoamericano, pero adaptándolo a la normativa jurídica y la cultura panameña. Se abrió un proceso participativo para que los jueces, magistrados y servidores judiciales pudieran aportar ideas y observaciones, lo que aumentó la credibilidad del sistema y la confianza en los miembros del Órgano Judicial. Entre estos principios podemos mencionar los siguientes:

- Independencia: Las instituciones que aseguran la independencia judicial dentro del marco del Estado constitucional no buscan colocar al Juez en una posición de privilegio. El propósito principal es que a cada ciudadano se le respete sus derechos cuando están siendo juzgados, para así evitar la arbitrariedad y velar porque se protejan los valores constitucionales.
- Imparcialidad: para ser tratados ante la ley sin discriminación durante todo el proceso judicial.
- Motivación: El Juez debe tomar sus decisiones en base a lo que se presenta, a los hechos y a lo que reglamenta la ley.
- Justicia y equidad: Un Juez equitativo es aquel que, sin infringir el derecho vigente,

tiene en cuenta las particularidades del caso y las posibles consecuencias, resolviendo de acuerdo con criterios coherentes y aplicables a casos sustancialmente similares.

Según datos obtenidos del Código de Ética (2008) se puede mencionar otros principios como cortesía, responsabilidad constitucional, transparencia, integridad, secreto profesional, prudencia, diligencia y honestidad profesional.

En cuanto al Privado de Libertad, ptimeramente se destaca la Ley 55 de 30 de julio de 2003, también conocida como Ley Penitenciaria, que es la legislación vigente que regula el Sistema Penitenciario de Panamá. Esta ley fue promulgada el 30 de julio de 2003 y reemplazó a la Ley 87 de 1 de julio de 1941, que hasta entonces había regido nuestro sistema penitenciario. La misma en su artículo 3, describe privado de libertad de la siguiente manera “*Se entenderá privado o privada de libertad la persona sujeta a custodia en cualesquiera de los centros penitenciarios del país, por mandato de la autoridad competente*” (p. 3). Ante esta definición es importante señalar que las personadas internadas en centros de privación de libertad conservan un conjunto de derechos que deben ser preservados.

Existen diversas organizaciones que velan por garantizar los derechos de las personas y de igual manera de los privados de libertad una de las que se destaca es la “*Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)*” esta se dedica a la promoción, el respeto y la protección de los derechos de toda persona en América, cabe destacar que la CIDH desarrolla su labor basándose en tres pilares fundamentales: el Sistema de Petición Individual, el Monitoreo de la Situación de los Derechos Humanos en los Estados Miembros y la Atención a Líneas Temáticas Prioritarias.

Castro (2018) expone que:

“La Corte ha conocido más de 40 casos en que una de las dimensiones de la vulneración de derechos reclamada está vinculada con la lesión de derechos en el interior de una prisión o lugar de detención. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que los países que más condenas han recibido por vulnerar derechos en el interior de las prisiones son Perú con 12 condenas; Ecuador, Argentina y Venezuela con 5, y Honduras con 4. Otros países como Haití y Trinidad y Tobago han sido condenados en dos ocasiones. Por su parte, México, Brasil, Guatemala, Barbados, Colombia, Paraguay, Bolivia y Surinam han sido condenados en una sola ocasión” (p. 41).

Los privados de libertad sufren una serie de abusos, tanto de la misma institución como de los internos, dado a que dentro de las cárceles no existen un adecuado control de lo que se establece en la ley, viven en hacinamiento, no se brinda una atención médica adecuada, existe discriminación,

violaciones, entre otras situaciones. Con ello, resalto que se requiere de una reforma de estos derechos con el fin de que se cumpla en las cárceles de Latinoamérica.

Para abordar más el tema de los derechos se expone a continuación los Estándares Internacionales del Sistema de Naciones Unidas del que Panamá forma parte, estos son:

- Convención sobre los Derechos del Niño: tratado internacional que protege a los niños y se enfoca en buscar oportunidades y mejorar su educación. Fue adoptada el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. Panamá la aprobó mediante Ley 15 del 6 de noviembre de 1990.
- Observación General No. 10 del Comité de los Derechos del Niño (25 de abril de 2007): representa un análisis interpretativo de los derechos del niño.
- Observación General No. 14 del Comité de los Derechos del Niño (29 de mayo de 2013): se enfoca en que los estados partes, muestren mayor interés, con el fin de garantizar la integridad del niño.
- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing): Adoptadas el 28 de noviembre de 1985, estas reglas establecen principios y directrices para el tratamiento y la justicia de menores en conflicto con la ley, asegurando su protección y respetando sus derechos.
- Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad (Reglas de la Habana): Adoptadas el 14 de diciembre de 1990, con ella se busca que se garantice la protección y el bienestar de los menores que están privados de libertad.
- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio): Adoptadas el 14 de diciembre de 1990, estas reglas establecen pautas para el uso de medidas alternativas a la privación de libertad para infractores juveniles, buscando su reintegración social.
- Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Declaración de Riad): Adoptadas el 14 de diciembre de 1990, estas directrices buscan prevenir la delincuencia juvenil y promover políticas y programas que aborden las causas y factores de riesgo asociados con la delincuencia juvenil.
- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela): Adoptadas el 15 de diciembre de 2015, estas reglas buscan mejorar las condiciones de los reclusos y promover su rehabilitación y reinserción social.
- Procedimientos para la Aplicación Efectiva de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos: Aprobados por el Consejo Económico y Social en su resolución 1984/47 de 25 de mayo de 1984, estos procedimientos proporcionan orientación sobre la implementación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos.

- Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos: Adoptados el 14 de diciembre de 1990, estos principios establecen normas mínimas para el tratamiento de los reclusos y buscan garantizar su dignidad y respeto por sus derechos humanos.
- Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión: Adoptados el 9 de diciembre de 1988, estos principios buscan garantizar la protección de todas las personas privadas de libertad y establecen pautas para su tratamiento y condiciones de detención.
- Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok): Adoptadas el 16 de marzo de 2011, estas reglas buscan mejorar las condiciones de detención y el tratamiento de las mujeres delincuentes y proporcionar medidas no privativas de la libertad apropiadas.
- Declaración Universal de Derechos Humanos: Es un documento fundamental que proclama los derechos humanos básicos y fundamentales que deben ser respetados y protegidos para todas las personas, sin importar su raza, religión, género u origen. Fue adoptada el 10 de diciembre de 1948.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Adoptado el 16 de diciembre de 1966, este pacto es un tratado que busca proteger los derechos civiles y políticos de las personas y establece un mecanismo de supervisión a través del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
- Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas: Adoptada el 20 de diciembre de 2006, esta convención tiene como objetivo prevenir y sancionar las desapariciones forzadas de personas y con ella establecer medidas que protejan a las víctimas y sancionen a los actores responsables.

Cada uno de estos instrumentos busca garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos y establece principios y directrices para asegurar el trato digno y justo de las personas, especialmente de los niños, los reclusos y todas aquellas sometidas a detención o prisión.

También se destacan los Estándares Internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y estos son:

- Convención Americana sobre Derechos Humanos: También conocida como “Pacto de San José” (18 de julio de 1978). Garantiza los derechos humanos en toda América.
- Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (28 de febrero de 1987): se enfoca en la prevención y a la vez de la sanción con respecto de los actos de tortura y crueldad en los Estados miembros de la OEA. Destaca el hecho de que, tienen

la obligación de prohibir, prevenir y proteger la tortura o cualquier acto que denigre a la persona, además de investigar y sancionar a todo aquel que se encuentre vinculado o sea responsable directo.

- Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (28 de marzo de 1996): su objetivo es la erradicación y la prevención de la desaparición de personas a través de la violencia. Los Estados partes tienen la obligación de brindar protección a las personas y a los familiares víctimas. Además de siempre investigar y garantizar el reparo de la justicia.
- Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas: Adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2008 mediante resolución 1/08, estos principios buscan establecer normas y recomendaciones para la protección y el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la región. Abordan temas como las condiciones de detención, el acceso a la justicia, el trato humanitario y la prevención de la tortura y el maltrato.
- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Instituto de Reeducción del Menor” vs. Paraguay: Esta sentencia fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2 de septiembre de 2004 en el caso que involucra a un centro de reeducación para menores en Paraguay. La Corte se pronunció sobre las excepciones preliminares, el fondo del caso, las reparaciones y las costas. La sentencia destaca la importancia de garantizar los derechos de los menores en conflicto con la ley y de protegerlos contra tratos inhumanos y degradantes.

Estos instrumentos y decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tienen como objetivo proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas en el continente americano. Buscan prevenir y sancionar violaciones de derechos humanos, como la tortura y la desaparición forzada, y establecer estándares y principios para la protección de personas privadas de libertad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son los órganos principales encargados de supervisar y proteger los derechos humanos en la región.

En Panamá la realidad de las cárceles presentan demasiadas carencias, entre las que se encuentran están:

- Sobrepoblación: Las cárceles en Panamá han sufrido de sobrepoblación crónica. Según datos de 2020, la población carcelaria superaba significativamente la capacidad oficial del sistema penitenciario, lo que llevaba a una alta densidad de reclusos en las instalaciones.
- Hacinamiento: La sobrepoblación ha resultado en hacinamiento, lo que ha afectado

gravemente las condiciones de vida dentro de las prisiones. El hacinamiento puede generar tensiones, violencia y dificultades para proporcionar servicios básicos a los reclusos.

- **Violencia y motines:** Los incidentes de violencia, motines y disturbios han sido frecuentes en las cárceles de Panamá. En varias ocasiones, se han registrado enfrentamientos entre grupos criminales rivales dentro de las prisiones, lo que ha llevado a la pérdida de vidas y ha agravado la inseguridad en el sistema penitenciario.
- **Escasez de recursos y condiciones precarias:** La insuficiencia de recursos y la infraestructura inadecuada han generado condiciones precarias dentro de las prisiones, al igual que la falta de personal penitenciario y también la falta de programas eficientes para la rehabilitación, todo esto ha dificultado la implementación de enfoques de resocialización.
- **Denuncias de violaciones de los Derechos Humanos:** a través de los años, han surgido diversas denuncias de violación a los derechos humanos, que incluyen maltrato, tortura, acceso insuficiente a atención médica y condiciones inhumanas de detención.

Desde mi punto de vista, el papel del Juez de Cumplimiento en Panamá es crucial, ya que tiene la responsabilidad de garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Sin embargo, en la práctica, existen desafíos significativos que cuestionan su efectividad y su capacidad para actuar como un verdadero garante de los derechos fundamentales.

Una de las principales preocupaciones en Panamá es la falta de transparencia y rendición de cuentas en el sistema penitenciario. La opacidad en la gestión de las cárceles y la falta de acceso a información relevante dificultan el escrutinio público y la posibilidad de detectar posibles abusos o negligencias. Sin una supervisión adecuada, es difícil evaluar si el Juez de Cumplimiento está tomando decisiones imparciales y basadas en el respeto a los derechos humanos de los reclusos. Y es que en Panamá el acceso a la información es escaso, haciendo muchas veces difícil hacer un diagnóstico certero sobre la realidad, lo que orilla a que se viole el acceso de todos los cuidados a la información.

La sobrepoblación carcelaria y la falta de recursos adecuados son problemas graves que afectan la efectividad del Juez de Cumplimiento. La alta densidad de reclusos en las instalaciones carcelarias puede generar tensiones y violencia, lo que dificulta aún más la tarea de garantizar un trato digno y humano para los privados de libertad.

La influencia política y la presión externa pueden comprometer la autonomía del Juez de Cumplimiento y limitar su capacidad para tomar decisiones justas y alineadas con los estándares de derechos humanos internacionales. A pesar de las regulaciones y estándares internacionales,

en muchos países se siguen violando los derechos humanos de las personas privadas de libertad debido a la falta de recursos y de voluntad política para mejorar las condiciones carcelarias a pesar de la existencia de convenciones específicas para prevenir y sancionar la tortura, esta práctica sigue ocurriendo en algunos países. Las denuncias de maltrato a personas privadas de libertad son frecuentes y, en algunos casos, los responsables de estos actos quedan impunes, lo que socava la confianza en el sistema de justicias.

Para que el Juez de Cumplimiento pueda cumplir verdaderamente su función como garante de los derechos humanos, se necesitan acciones concretas. Es esencial mejorar la transparencia en la gestión carcelaria, promover una mayor rendición de cuentas y garantizar que el poder judicial sea independiente de presiones políticas o de otro tipo. Además, se deben implementar estrategias para abordar la sobrepoblación carcelaria y mejorar las condiciones dentro de las prisiones.

En muchos casos, las personas privadas de libertad enfrentan obstáculos para acceder a la justicia y recibir un debido proceso. La falta de recursos para la defensa legal y la demora en los juicios son problemas recurrentes que afectan negativamente sus derechos. En lugar de enfocarse únicamente en el castigo, los sistemas penitenciarios deberían poner más énfasis en la rehabilitación de los reclusos. La falta de programas efectivos de reinserción social puede llevar a un círculo vicioso de reincidencia delictiva. Un sistema de justicia penal efectivo, con un Juez de Cumplimiento que cumpla adecuadamente sus funciones, puede contribuir a prevenir el delito. Al abordar las causas subyacentes del comportamiento delictivo y ofrecer alternativas a la reincidencia, se puede reducir la comisión de nuevos delitos y promover una sociedad más segura.

En muchos países, las personas de bajos recursos y las minorías étnicas son sobrerrepresentadas en las cárceles. La falta de acceso a una defensa adecuada y el prejuicio racial o social pueden contribuir a esta desigualdad en el sistema de justicia penal. La labor del Juez de Cumplimiento busca asegurar que las penas sean cumplidas en un contexto justo y equitativo. Su función de vigilancia y control evita que haya discriminación o tratos crueles e inhumanos hacia los reclusos, independientemente de su origen étnico, género, religión o cualquier otra condición personal.

La existencia de un Juez de Cumplimiento independiente y eficiente es un pilar fundamental del Estado de derecho. Su presencia asegura que las decisiones judiciales se cumplan y que los derechos fundamentales sean protegidos, lo que contribuye a la confianza en el sistema judicial y al respeto a las instituciones democráticas. El cumplimiento adecuado de las funciones del Juez de Cumplimiento es esencial para garantizar la protección de los derechos humanos, promover la justicia y equidad, favorecer la resocialización de los reclusos, prevenir el delito y fortalecer el

Estado de derecho. Su labor tiene un impacto significativo en la sociedad, ya que busca equilibrar la justicia punitiva con la protección de los derechos fundamentales y el fomento de la rehabilitación.

CONCLUSIÓN

La figura del Juez de Cumplimiento en teoría desempeña un papel fundamental como garante de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Su labor de supervisión, control y promoción de una justicia restaurativa debería contribuir a asegurar que la privación de libertad se realice en condiciones dignas y respetuosas de los derechos fundamentales de los reclusos.

Además, su enfoque en la resocialización y reinserción social debería buscar no solo sancionar a los infractores, sino también ofrecer oportunidades para corregir conductas y prepararlos para una vida en libertad más responsable y productiva. Sin embargo, se deben abordar los desafíos existentes, como la sobrepoblación carcelaria y la corrupción, para fortalecer la eficacia de su labor. Estas funciones lamentablemente están solo plasmadas en papel, y es que a pesar de que el juez de cumplimiento tiene bajo sus responsabilidades temas tan sensitivos, la realidad es que en Panamá tenemos un sistema colapsado, que violenta los derechos humanos de los reclusos y que, en la mayoría de los casos, en vez de resocializar funcionan como escuela de especialización en delitos.

Es vital que el Juez de Cumplimiento cuente con independencia y recursos adecuados para llevar a cabo su función de manera efectiva, garantizando la transparencia y rendición de cuentas en el sistema penitenciario. De esta manera, se podrá fortalecer el Estado de derecho y promover una sociedad más justa y respetuosa de los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos, incluso aquellos que se encuentran en situación de reclusión.

En última instancia, el Juez de Cumplimiento representa una esperanza para la protección de los derechos humanos en el contexto penitenciario, abogando por una sociedad más justa y equitativa para todos sus ciudadanos, incluso aquellos que han cometido errores en el pasado. Es responsabilidad de todos velar por que se instauren cambios y que se lleve a la aplicación las leyes del país, para así poder garantizar el estado de derecho.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asamblea Legislativa. (30 de julio de 2003). Ley 55. Que reorganiza el Sistema Penitenciario. Gaceta Oficial N°24,857: http://www.oas.org/juridico/spanish/gapeco_sp_docs_pan1.pdf
- Asamblea Nacional. (2007). Ley 14. Se adopta el Código Penal de la República de Panamá. Gaceta Oficial Digital No. 26057: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_pan_ley14.pdf
- Asamblea Nacional. (28 de agosto de 2008). Ley 63. Que adopta el Código Procesal Penal. Gaceta Oficial Digita. No. 26114: https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/uploads/2011/01/codigo-penal-ley-63.pdf
- Castro, Á. (2018). Estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de imputados y condenados privados de libertad. Anuario de Derechos Humanos(14), 35-54. <https://revistas.uchile.cl/index.php/ADH/article/view/49161/54183>
- Ciocchini, P. (2019). El rol de los jueces en el marco de la ‘lucha contra el delito’ en el Sur Global: un análisis comparativo de los casos de la Provincia de Buenos Aires y Metro Manila. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 21(2). <https://revistas.urosario.edu.co/xml/733/73360074005/html/index.html#:~:text=Mientras%20que%20la%20funci%C3%B3n%20principal,la%20sociedad%20del%20abuso%20del>
- Colmenares, C. (2012). El Rol del Juez en el Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia. Uni Roja, 65 - 81. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6713638.pdf>
- González, H. (2018). El rol de la junta técnica penitenciaria, en la aplicación de los reemplazos de penas por el juez de cumplimiento en el sistema penal acusatorio. Revista Cathedra: <https://revistas.umecit.edu.pa/index.php/cathedra/article/download/260/580>
- Lasso, L. (2017). Análisis en torno al proceso por cobro coactivo de las concesiones otorgadas por la Autoridad Marítima de Panamá. Maestría thesis, Universidad de Panamá. http://up-rid.up.ac.pa/4607/1/lionel_lasso.pdf
- Órgano Judicial. (4 de septiembre de 2008). Acuerdo N° 523 Código de Ética Judicial. www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_pan_acuerdo523.pdf
- Peña, C. (2019). La congruencia real de infracciones y el garantismo constitucional. Master's thesis. Universidad Regional Autónoma de Los Andes (Quevedo). <https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/10735/1/TUAEXCOMMCO005-2019.pdf>

LA AUDITORIA FORENSE COMO HERRAMIENTA DE FISCALIZACION A LA OPERACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL EN PANAMÁ

Yadira Bonilla Caballero

Abogada independiente, Docente y Contadora Público Autorizada

Panamá

yadiracaballero@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-7290-9026>

DOI: 10.37594/cathedra.n20.1222

Fecha de recepción: 25/09/2023

Fecha de revisión: 08/10/2023

Fecha de aceptación: 20/10/2023

RESUMEN

La Caja de Seguro Social (CSS) en Panamá, es la institución de mayor impacto social del país. Los aportes de seguridad social son importantes, pues son para beneficio de cada uno de los contribuyentes, ayudan a proteger el acceso a los derechos básicos en salud y bienestar del afiliado y de sus posibles beneficiarios, en el caso de que los hubiere. Actualmente existe toda una problemática sobre esta institución del Estado y sus finanzas, sin embargo, las acciones realizadas en el año 2020 permitieron cerrar con un aproximado de excedente de caja por \$353 millones que ayudaron a financiar el año 2021, un año en el cual la economía se recuperaba paulatinamente.

Palabras clave: Seguridad Social, fraude, Ley, reglamentos, prueba pericial, autoría y auditoría forense

THE FORENSIC AUDIT AS AN INSPECTION TOOL FOR THE OPERATION OF THE SOCIAL SECURITY FUND IN PANAMA

ABSTRACT

The Social Security Fund (CSS) in Panama is the institution with the greatest social impact in the country. Social security contributions are important, since they are for the benefit of each of the taxpayers, they help protect access to the basic rights in health and well-being of the member and their possible beneficiaries, if there are any. Currently there is a whole problem regarding this State institution and its finances, however, the actions carried out in 2020 allowed it to close with an approximate cash surplus of \$353 million that helped finance the year 2021, a year in which the economy was gradually recovering.

Keywords: Social Security, fraud, Law, regulations, expert evidence, authorship and forensic audit.

ORIGEN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL

La Caja de Seguro Social fue creada mediante la Ley 23 de 21 de marzo de 1941 y empezó a regir desde el 31 de marzo de ese mismo año, fecha que se conmemora como el Día de la Seguridad Social Panameña.

Para facilitar la comprensión del desarrollo cronológico de la Caja de Seguro Social, desde su inicio hasta el presente, se ha dividido en varios períodos que están directamente relacionados con el tiempo de gestión de las diferentes direcciones.

Período 1941-1943: Se inició el Sistema de Seguridad Social en Panamá. El objetivo fundamental durante la misma fue el de amparar, dentro de un solo régimen, a todos los trabajadores, tanto del sector público como privado, definiendo un sistema único, contributivo e igualitario. Resulta necesario señalar que al inicio el régimen de Seguridad Social sólo abarcaba a las ciudades de Panamá y Colón.

Período 1943 – 1954: Si bien la Ley 23 de 1941 creó el régimen de seguridad social en Panamá, es oportuno señalar que dicha legislación no cubría una serie de aspectos relevantes que debían permitir organizar dicho régimen sobre bases técnicas, científicas y doctrinarias, razón por la cual se procedió a cubrir esta etapa mediante la Ley 134 de 1943.

Período de 1954-1962: En 1954 se aprobó el Decreto- Ley 14 de 1954, mediante el cual se hizo una revisión integral al régimen de seguridad social en Panamá ampliándose su campo de aplicación a los distritos de David, Barú, Bocas del Toro, Chitré, Santiago, Aguadulce y Natá.

Período 1962-1970: Para este lapso, se inaugura el Hospital General, la extensión de la cobertura del Programa de Enfermedad a los miembros de la familia del asegurado, la concesión de pensiones de sobrevivientes, el pago de subsidio por incapacidad temporal, la creación de las asignaciones familiares y la mejora del subsidio de maternidad a catorce semanas, calculado a base de cien por ciento del salario de la trabajadora.

Período de 1970-1972: Durante el año de 1970, se centraliza la cobertura obligatoria de los riesgos profesionales.

Período 1972-1975: Se inicia la integración de los servicios de salud entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, correspondiéndole a la última efectuar el mayor aporte financiero.

Período 1975-1979: Se inaugura la Policlínica Especializada como parte del Complejo Hospitalario Metropolitano. Se crea el Fondo Complementario de Prestaciones Sociales para los servidores públicos y se mejora el régimen de vejez e invalidez, aumentando las pensiones vigentes y mejorando el cálculo de las prestaciones por conceder. Lamentablemente el aporte que le correspondía al gobierno no se dio y esto produjo su desaparición en 1978.

Período 1979-1982: Como resultados de los Tratados Torrijos-Carter, se incorporan al Seguro Social Obligatorio algunos sectores de trabajadores de la antigua zona canalera.

Período 1982-1989: Se produce el descalabro financiero del Programa Colectivo de Vivienda, con las consiguientes implicaciones administrativas, económicas y morales para la CSS.

Período 1989-1991: Este período se caracteriza por los acontecimientos que conmocionaron la vida nacional, sobre todo por los sucesos de finales de 1989.

Período 1990-1991: La Caja de Seguro Social, afectada por sus finanzas durante la década de los 80, padecía una profunda crisis, la mayoría de los hospitales y policlínicas sin condiciones para brindar un servicio aceptable y con dificultades para cumplir con eficiencia su labor.

1991: El día viernes 13 de diciembre de 1991, se aprueban las reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, determinando un incremento de dos años en la edad de jubilación a los asegurados, a partir de 1995.

Otras de las reformas de consideración es la que determina que se toma como salario base mensual para el cómputo de las pensiones, el promedio de los salarios correspondientes a los siete mejores años de cotizaciones acreditadas en la cuenta individual del asegurado.

La Asamblea aprobó así mismo, la eliminación de las jubilaciones anticipadas desde 1993.

1992: La Ley N°30 del 26 de diciembre de 1991, que introdujo las mencionadas reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, determinó que se incorporaran a los recursos de la institución, las cantidades correspondientes a la segunda partida del décimo tercer mes pagada por los empleadores particulares y por el Estado. Sin embargo, pocos meses más tarde, la noche del 12 de agosto de 1992, en medio de una acalorada controversia sobre las repercusiones que la medida tendría en torno a las finanzas de la CSS, fue sancionada por el presidente Guillermo Endara la Ley que devolvía a los trabajadores la segunda partida del decimotercer mes, después de

ser aprobada en tercer debate por la Asamblea Legislativa. La Asamblea mantuvo en 180 los meses de cotizaciones para tener derecho a la jubilación.

1994: En octubre de 1994 se implementa un Plan de Modernización, dirigido a colocar a la Caja de Seguro Social a tono con los avances tecnológicos y los nuevos criterios administrativos que se imponen en el mundo moderno.

Período 1996-1999: En 1996 se continuó con el proceso de modernización de la institución, se dio énfasis a las inversiones en equipos e infraestructuras, insumos y medicamentos, además del mejoramiento de los servicios y la atención que se brinda.

Período 1999-2001: Se dio inicio a una serie de acciones como reducir la mora quirúrgica, la creación del departamento de Defensoría del Asegurado, inauguración de varias unidades médicas enfocadas en atención primaria de salud, fortalecimiento de la gestión de cobros a empresas morosas con la entidad en concepto de cuota obrero patronal y la apertura de instancias de participación de los actores sociales de la seguridad social.

Período 2004-2009: En el 2005, el director de la institución en ese entonces, René Luciani, convocó a un diálogo nacional para realizar reformas a la CSS, debido a que los distintos programas que administraba la entidad se encontraban en déficit. Después de 15 meses de diálogo, luchas, protestas y arduo trabajo, fue aprobada la Ley Orgánica No 51 de diciembre de 2005. Con la nueva norma jurídica se incrementa la cuota a los trabajadores y empleadores en tres períodos distintos; 2008, 2011 y 2013.

Surgieron nuevas tasas impositivas: Se creó un nuevo sistema de pensiones, el Sub Sistema Mixto y se mantiene el de Beneficio Definido; se fortalecieron las políticas de cobros, se obligó al Estado a dar un aporte solidario a los beneficiarios, se obliga a los trabajadores independientes al pago de cuotas, entre otras obligaciones.

2009 - a la actualidad: Se siguen impulsando importantes proyectos de modernización de la Caja de Seguro Social entre las que destacan las citas por medio de la página web y por vía telefónica. Se han optimizado todos los procedimientos médicos quirúrgicos, se han realizado inversiones en equipos de alta tecnología relacionados al campo de los diagnósticos. Se han sistematizado la mayor parte de los procesos administrativos. Así como gran inversión en proyectos de infraestructura.

MARCO LEGAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL

Ley 51 de 27 de diciembre de 2005: Que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y dicta otras disposiciones.

Ley 6 de 22 de enero de 2002: Que dicta Normas para la Transparencia en la Gestión Pública, establece la Acción de Habeas Data y otras disposiciones.

Código de Ética: Mediante Resolución No.39,301-2006-J.D. de 28 de diciembre de 2006, la Caja de Seguro Social resolvió “ADOPTAR el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, decretado por el Órgano Ejecutivo, a través del Decreto Ejecutivo No. 246 de 15 de diciembre de 2004, publicado en la Gaceta Oficial No.25,199 de 20 de diciembre de 2004”

Ley 38 de 31 de julio de 2000: (Artículos 41-44 que regula el derecho de petición) “Que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones especiales G. O. 24,109 de 2 de agosto de 2000”.

Ley 7 de 14 de febrero 2008: Que adopta medidas para prevenir prohibir y sancionar actos discriminatorios y dicta otras disposiciones.

Decreto Ejecutivo No. 333 de 5 de diciembre 2019.: Que reglamenta la Ley 15 de 31 de mayo 2016, que reforma la Ley 42 de 1999, por la cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, y se dicta otra disposición.

Decreto Ejecutivo 511 de 24 de noviembre de 2017: Que adopta la política pública de transparencia de Datos Abiertos de Gobierno.

Resolución No. DS-3513-2018 de 17 de enero de 2018: Por la cual se desarrolla la política pública de transparencia de datos abiertos de gobierno, adoptada mediante Decreto Ejecutivo No. 511 de 24 de noviembre de 2017.

Resolución No. DGCP-ANTAI-001-2019 de 20 de mayo de 2019: Por la cual se aprueban los estándares para la publicación de la información de los proyectos de infraestructura pública.

El tema de estudio de la presente investigación se enmarca en la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005, mediante la cual se reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.

De acuerdo con esta Ley se establece en su artículo 2, lo siguiente:

La naturaleza jurídica y fines de la Caja de Seguro Social, que le concede a este ente la potestad de la administración, planificación y control de las contingencias de la seguridad social panameña.

La Caja de Seguro Social es una entidad de Derecho Público, autónoma del Estado, en lo administrativo, funcional, económico y financiero; con personería jurídica y patrimonio propio.

La Caja de Seguro Social tiene por objeto garantizar a los asegurados el derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia, frente a la afectación de estos medios, en casos de retiro por vejez, enfermedad, maternidad, invalidez, subsidios de familia, viudez, orfandad, auxilio de funerales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de conformidad con los términos, límites y condiciones establecidos en la Constitución y la ley, y con las posibilidades financieras de la institución.

Para cumplir con sus objetivos, la Caja de Seguro Social procurará su estabilidad y sostenibilidad financiera; una gestión eficiente y transparente; un recurso humano calificado, y la participación y el control social mediante los actores representativos de los trabajadores, los empleadores, los pensionados y del gobierno.

A tal efecto, gozará de las siguientes prerrogativas y facultades:

1. Administrar y mantener sus fondos separados e independientes del Gobierno Central, con el deber de administrarlos con transparencia.
2. Aprobar su proyecto de presupuesto, el que será incorporado al Proyecto de Presupuesto General del Estado, sin modificaciones.
3. Escoger, nombrar y destituir a su personal y fijar su remuneración con absoluta independencia, de conformidad con el sistema de méritos de carrera pública, cumpliendo con la Constitución, las leyes, el reglamento interno de personal, los manuales operativos y descriptivos de clases de cargo y los acuerdos vigentes. También se menciona, que una vez comprobadas las condiciones actuariales y las previsiones presupuestarias y económicas que garanticen su financiamiento, la Caja de Seguro Social incluirá dentro de sus prestaciones el riesgo de paro forzoso.

PROCESO POR COBRO COACTIVO

Es un procedimiento especial por medio del cual las Entidades Públicas pueden hacer efectivo el recaudo de las deudas fiscales a su favor, a través de sus propias dependencias, sin que medie intervención judicial, adquiriendo la doble calidad de Juez y parte dentro del proceso.

De acuerdo al tema que refiere en esta investigación para determinar el proceso de cobro que se da en la CSS a las empresas y personas morosas, tenemos el artículo 5 de la Ley 51, a través del cual se establece que la CSS tiene jurisdicción coactiva para el cobro de todo aquel dinero que debe ingresarle indistintamente del concepto, entendiéndose que allí se abarca el que viene por multas, recargos e intereses por retraso en el pago puntual. (Gaceta Oficial, 2005)

Es importante definir que la jurisdicción coactiva recae sobre el director general de esta institución, según lo determina este artículo 5 de la ley 51, sin embargo, también da a este, la flexibilidad de poder delegarla en los funcionarios de la CSS con idoneidad para ejercer el derecho.

También relata este artículo que el director general de la CSS es el responsable de la apertura de los procesos de jurisdicción coactiva cuando la mora o retraso de cualquier pago con la institución exceda los tres meses.

LOS ARREGLOS DE PAGO

Se pueden realizar dependiendo del monto de la deuda. La empresa interesada en ponerse al día puede iniciar con el pago de un porcentaje de la morosidad y la diferencia la puede terminar de pagar hasta los siguiente 24 meses. Si la empresa morosa comprueba que no puede pagar la deuda, y por tal razón, requiere mayor tiempo para hacer los pagos a la Caja de Seguro Social, entonces se le puede extender el plazo hasta 36 o 48 meses, dependiendo de cada caso.

Mientras que aquellos empleadores morosos que concertaron un arreglo de pago, pero el mismo fue incumplido o no realizaron ningún acuerdo para saldar la deuda (y mantengan más de tres meses de morosidad), se les aplicará el cobro por jurisdicción coactiva.

En otras palabras, a los empleadores morosos que no lleguen a ningún tipo de arreglo de pago a nivel judicial se les puede proceder con el secuestro o el embargo.

DE LAS SANCIONES, MULTAS E INTERESES

El Código Penal Panameño, en su artículo 237, establece que el director, dignatario, gerente, administrador, representante legal, empleado o trabajador de una empresa que, en el término de tres meses, luego de que surja la obligación de pagar, retenga y no remita las cuotas empleado-empleador a la Caja de Seguro Social, siempre que estas superen la suma de mil balboas (B/.1,000.00), o quien haya sido requerido por esta entidad para la liberación de la retención será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

Igual sanción se aplicará a los empleadores o a sus representantes y demás sujetos obligados que, mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, evadan o de cualquier forma impidan la afiliación al Seguro Social de las personas obligadas a afiliarse. Mientras que el Artículo 238 señala que quien retenga y no remita los descuentos voluntarios del salario, autorizados por el trabajador, a su destinatario, dentro del plazo señalado al efecto, será sancionado con prisión de seis meses a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

En el 2017, los abogados de la Caja de Seguro Social participaron en 303 audiencias por retención de cuotas, las cuales se llevaron a cabo en Juzgados de Circuitos o Municipales de Panamá, Panamá Oeste y San Miguelito, dependiendo del monto de la retención.

Debido a esta acción, varios imputados deciden en el transcurso del proceso penal realizar la cancelación de la deuda, arreglo o convenio de pago de los períodos morosos querellados con alguna de las instancias de la institución, lo que conlleva a algunos Jueces a suspender temporalmente el proceso penal y dictaminar el sobreseimiento provisional; sin embargo, si el imputado incumple con lo acordado, la acción legal en su contra prosigue.

El acuerdo de pago de las cuotas retenidas implica el monto de las cuotas empleado empleador atrasado, Seguro Educativo e Impuesto Sobre la Renta, incluyendo las multas, los recargos y los intereses legales correspondientes al período moroso.

ÍNDICES DE MOROSIDAD

Para el año 2017, 44 mil empleadores le adeudan \$318 millones a la Caja de Seguro Social. Esta cifra de empleadores corresponde a igual número de expedientes que se tramitaron en los Juzgados Ejecutores de la Caja de Seguro Social hasta el mes de septiembre de 2018.

En la Caja de Seguro Social, es la Unidad de Análisis de la Depuración de la Morosidad (UNADEM), quien bajo un análisis investigativo determina que morosidades proceden o no, debido a la facturación de oficio de planillas regulares improcedentes.

Los Juzgados Ejecutores aplican estrictamente lo establecido en el Procedimiento 182-00 en concordancia con el Código Judicial de la República de Panamá, además del Código Penal, en lo que refiere a la conformación de los expedientes de las solicitudes de las querellas penales por el delito de la retención indebida de cuotas por parte del empleador presentadas ante el Ministerio Público por la Unidad de Denuncias y Sanciones de la Dirección Ejecutiva Nacional Legal. (Codigo Judicial de Panama, n.d.)

A los empleadores que mantienen procesos con la Caja de Seguro Social se les procede a aplicar medidas cautelares de bienes, como secuestros y embargos.

La Coordinación Administrativa Judicial de la Caja de Seguro Social es el ente encargado de ejercer la jurisdicción coactiva de la institución y está conformado por 10 Juzgados Ejecutores con jurisdicción y representación a nivel nacional.

Para los Juzgados Ejecutores, el secuestro es una herramienta, medida preventiva con la cual se busca asegurar el pago de la morosidad que tiene un empleador y, en caso de cancelar el monto adeudado, se le devuelve el bien confiscado; y si por alguna razón, el empleador no honra la deuda se procede a elevar el caso a un embargo y posteriormente, a remate para que con el resultado de la venta pública, satisfacer los montos morosos que tiene el empleador con la Caja de Seguro Social.

AUDITORÍA

González (2002), señala que *“la auditoría en su acepción más amplia, significa verificar que la información financiera, operacional y administrativa que se presenta es confiable, veraz y oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se dan en la forma como fueron planeadas, que la políticas y lineamientos establecidos han sido observados y respetados; que se cumplen con las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentos en general. Es evaluar cómo se administra y opera al máximo de aprovechamiento los recursos”* (Gonzalez, 2002, pág. 49).

Por su parte, Valencia (2016), define a la auditoría como *“el examen de evaluación de la información (generalmente la financiera), que se lleva a cabo mediante la técnica especializada para determinar el nivel de relación entre lo real (lo que arroja el análisis de la información) y lo previsto (los objetivos determinados por la entidad), con el propósito de emitir un juicio sobre la misma”* (Valencia, 2016, pág. 2).

AUDITORÍA FORENSE

Cano (2008), considera que la auditoría forense es *“la especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de funciones públicas o privadas”* (Cano & Lugo, 2004).

La Auditoría Forense es una especialidad de la Contaduría Pública y, a su vez, una rama de la Auditoría. Cano y Lugo (2004) señalan que *“la auditoría forense es, en términos contables, la ciencia que permite reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, para que sea aceptada por una corte o un juez en contra de los perpetradores de*

un crimen económico”. La auditoría forense cuenta con suficiente difusión y un uso profesional extendido en países desarrollados (Cano & Lugo, 2004).

Así pues, hablar y conocer de auditoría forense se convierte en una necesidad para el contador público. Con base en ello, se hizo una revisión bibliográfica identificando algunos estudios que dan indicios de cómo se viene tratando la auditoría forense en varios contextos; a continuación se muestra una síntesis de los hallazgos evidenciados en la literatura consultada.

FRAUDE

Calvo (2007), dice que el fraude es *“el engaño, dolo, acto de mala fe. Perjuicio delictuoso, generalmente económico que causa a una persona física o moral, mediante el engaño, ocultación inexactitud o acciones similares”*, algunas veces las empresas no quieren invertir en controles internos que permitan disminuir el riesgo de fraude en las empresas (Calvo, 2007, pág. 63)

Estupiñán (2006) refiere que el fraude es un *“acto intencional por parte de uno o más individuos del área de la administración, personal, terceros, que produce una distorsión en los estados financieros, el cual involucra: la manipulación o falsificación de documentos, el uso indebido de recursos y la aplicación indebida de las políticas de contabilidad”* (Estupiñán, 2006).

Cárdenas (2017), menciona que el fraude contable es llamado por algunos autores fraude administrativo y se clasifica en dos grupos, que son:

1. Revelaciones financieras engañosas; en este sentido el fraude administrativo es definido como la presentación equivocada e intencional de cantidades o revelaciones en los estados financieros, con el propósito de engañar a los usuarios de los mismos (Cárdenas Gil, 2017, pág. 19).
2. Malversación de activos; conjunto de prácticas no éticas realizadas al interior de las organizaciones por parte de los directivos o empleados, ya sea por presiones financieras externas, inequidades en el lugar de trabajo o laxitud moral general (Cárdenas Gil, 2017, pág. 21).

Villacorte (2014), se refiere al fraude como *“una acción encaminada a eludir cualquier disposición legal, ya sea esta fiscal, penal o civil, siempre que con ello se produzca perjuicio contra el Estado o en contra de un patrimonio. Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos”* (Villacorte, 2014).

La malversación de activos por su parte, consiste en la supresión u omisión de los efectos de ciertas transacciones en los registros o documentos. Registro de transacciones sin sustancia o respaldo. Mala aplicación de políticas contables.

Fraude es sinónimo de engaño hacia un tercero, abuso de confianza, dolo, simulación, etc. El término “*fraude*” se refiere al acto intencional de la administración, personal o de terceros, cuyo resultado es una representación equivocada de los estados financieros (Correa, 2011).

Fraude es el acto intencional realizado por una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno de una entidad (gobernanza), los empleados o terceros, que conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal (Norma Internacional de Auditoría 240, n.d.).

Los casos de fraude económico se han multiplicado en los últimos años. Pero el fenómeno del fraude no es algo estático y cada día surgen nuevas modalidades y métodos de defraudar, al igual que cambian los hábitos sociales y el entorno en su conjunto. Por ello, es preciso que se adopten importantes medidas de seguridad y detección de fraude, que sean capaces de detectar y prevenir casi cualquier fraude, por complejo que sea. Una de estas medidas es la auditoría forense (Nuño, 2017, p. 77).

CONCLUSIONES

En Panamá, la ley otorga a la caja del seguro social la figura del cobro coactivo, que se refleja en el artículo 5 de la Ley 51 de 2005, que reforma la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social, donde expone que esta figura de cobro se aplicara a todos los cobros de las sumas que le ingresen a esta institución, independientemente del concepto, igualmente determina que la jurisdicción corresponde al Director General de la institución, quien a su vez debe iniciar los procesos por jurisdicción cuando la mora sea mayor de tres meses.

La sola determinación e inicio en la viabilidad para que se ejerza auditorías forenses en la entidad de la Caja de Seguro Social, tendría un impacto positivo en la disminución de la cartera morosa de la cuota Obrero-Patronal pues no solo sería una auditoría con fines de cobranzas y que tiene una penalidad de hasta cuatro años de prisión sino que también se podrían descubrir, divulgar y atestar delitos de fraude, corrupción o lesiones patrimoniales penalizados por nuestras leyes con más severidad.

De acuerdo a los resultados de la presente investigación se ha analizado los altos índices de moratorias, que reflejan los listados oficiales que emana esta institución, específicamente los índices de morosidad de los empleadores por pago de cuota patronal a la CSS en los años 2016 y 2017, ante esta problemática se planteó el desarrollo de esta investigación, cuyos resultados permitieron conocer que existen problemas de corrupción de fondo en cuanto a la aplicación adecuada del proceso coactivo donde la corrupción actual de la institución y la falta de aplicabilidad de técnicas de auditoría en la misma han dejado pasar por debajo de la mesa muchas moratorias donde se evidencio por ejemplo falta de seguimiento a expedientes , no existen el debido proceso para efectuar el cobro, aunado a esto la falta de capacitación y actualización del personal en Auditoría Forense es una debilidad que ha servido a manos corruptas para manejar de una manera favorable el retardo y negligencia en los procesos de cobro coactivo y afectando el control interno dentro de la entidad.

La caja de seguridad social necesita mejorar entre sus principales deficiencias la implementación del examen forense como método de prevención del fraude porque pertenecer al sistema financiero y manejar altas tasas de dinero es más propenso al fraude financiero.

Ante estos hallazgos se hizo la propuesta de un Programa de auditoría forense integral que permita dar capacitación a los empleados de la Caja del seguro, y que el mismo contribuya como un aporte de esta investigación a esta problemática existente, el mencionado programa consiste en una secuencia de acciones donde se implementa un mecanismo técnico de evaluación de la estructura de control interno de la CSS, revisión del cumplimiento de leyes y regulación, determinación del grado de eficiencia y eficacia en la gestión de cobro con las empresas morosas para el logro de objetivos institucionales; y análisis de la información financiera.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ander-Egg, E. (2003). Repensando la investigación acción-participativa. Cuarta Edición. Lumen Hvmanitas.
- Arias, F. (2004). El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica. Caracas: Episteme, C.A. 6ta edición.
- Calvo. (2007). Innovación y futuro de las técnicas de investigación social en las ciencias. Revista de Trabajo, 19.
- Cano, D. L. (2008). Auditoría Financiera Forense. Bogotá: ECOE.
- Cano, M., & Lugo, D. (2004). Auditoría en la investigación criminal del lavado de dinero y activos. Obtenido de United StatesInterAmerican: <http://www.interamericanusa.com/>

- Cárdenas Gil, L. y. (2017). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Obtenido de Rol del Contador/ Auditor en la aplicación de la Justicia: Consultado en: <https://www.gerencie.com/auditoria-forense.html>
- Código Judicial de Panamá. (s.f.).
- Correa, M. (18 de 09 de 2011). Auditoría Chile. Recuperado el 25 de 02 de 2021, de Auditoria Forense: <http://auditoriachile.blogspot.mx/2011/09/fraudes-auditoria-forense.html>
- Estupiñán, R. (2006). Control interno y fraudes. Bogotá: ECOE.
- Gaceta Oficial. (2005). Ley 51 de 2005. Obtenido de https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/uploads/2016/11/Ley-51-de-2005.pdf
- Gonzalez, J. (2002). Auditoría. La Auditoría como actividad profesional. México: ECAFSA.
- Martínez Ruiz, H. (2018). Metodología de la Investigación 1ra Edición. México: CENGAGE.
- Norma Internacional de Auditoría 240. (s.f.). Obtenido de Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude.
- Nuño, P. (25 de 04 de 2017). Emprendepyme.net. Obtenido de Auditoria Forense: <https://www.emprendepyme.net/auditoria-forense.html>
- Valencia, S. D. (2016). Auditoría Forense herramienta para combatir la corrupción. México: Consultado en <http://ri.uandl/amex.mx.20.500.1179959189>.
- Villacorte, M. (2014). Global Conference on Business and Finance Proceedings. Responsabilidad del auditor frente al fraude empresarial. San José Costa Rica . Obtenido de Global Conference on Business and Finance Proceedings.

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE MUJERES EN LACTANCIA EN DETENCIÓN PROVISIONAL O CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA

Khumar Villalobos

Universidad UMECIT, Panamá.

Defensoría Pública del Órgano Judicial de Panamá

khumarv@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-5126-222X>

DOI: 10.37594/cathedra.n20.1223

Fecha de recepción: 25/09/2023

Fecha de revisión: 12/10/2023

Fecha de aceptación: 20/10/2023

RESUMEN

Este proyecto de investigación se centra en el estudio denominado “*El régimen jurídico de mujeres en lactancia en detención provisional o en cumplimiento de una sentencia condenatoria*” en dicha investigación se pretende describir y conocer su normativa jurídica en que esta es fundamentada. Dentro de esta investigación haremos un breve análisis sobre las distintas normativas jurídicas en que se basa el sistema penitenciario panameño, los derechos y garantías que consagran la Constitución Política de Panamá, decretos, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, código procesal penal y el código penal de Panamá en cuanto al ejercicio de la maternidad y lactancia en mujeres privadas de libertad que están en detención provisional o cumpliendo una sentencia condenatoria. Estos instrumentos jurídicos establecen la protección de todos los derechos inherente de toda persona que guardan relación con el derecho a la vida, salud, alimentación, el derecho al ejercicio de la maternidad y lactancia dentro de los centros penales y las condiciones deben garantizarse a las madres y los menores dentro del centros penitenciarios.

Palabras clave: Lactancia materna, derechos humanos, centro penitenciario, detención provisional, convenios internacionales.

THE LEGAL REGIME FOR BREASTFEEDING WOMEN IN PROVISIONAL DETENTION OR SERVING A CONVICTION

ABSTRACT

This research project focuses on the study called “*The legal regime of lactating women in provisional detention or in compliance with a conviction*” in said investigation it is intended to describe and know its legal regulations on which it is based. Within this investigation we will make a brief analysis of the different legal regulations on which the Panamanian prison system is based, the rights and guarantees enshrined in the Political Constitution of Panama, decrees,

international human rights treaties and conventions, the criminal procedure code and the penal code of Panama regarding the exercise of maternity and lactation in women deprived of liberty who are in provisional detention or serving a conviction. These legal instruments establish the protection of all the inherent rights of every person that are related to the right to life, health, food, the right to exercise maternity and breastfeeding within penal centers and the conditions must be guaranteed to mothers. and minors inside prisons.

Keywords: Breastfeeding, human rights, penitentiary center, provisional detention, international conventions.

INTRODUCCIÓN

Nuestro proyecto investigativo está orientado en el régimen jurídico de mujeres en lactancia en detención provisional o cumplimiento de una sentencia condenatoria. Nuestro país cuenta con una serie de leyes, decretos e instrumentos internacionales que van siempre en dirección a la protección de la dignidad humana. Por su parte, los privados y privadas de libertad serán tratados con respeto a su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos especialmente aquella población femenina que se encuentra en pleno periodo maternal y de lactancia materna junto a sus hijo/as dentro de los centros penales.

Hay que destacar que la maternidad en Panamá dentro de los centros penales es un tema de mucha relevancia que cada vez se agudiza. En este orden de ideas, es preciso señalar que parte de la población femenina se encuentra en este estado. Podemos considerar la maternidad como una etapa especialmente vulnerable de la vida de las mujeres especialmente aquellas en detención provisional o que se encuentran cumpliendo una sentencia condenatoria. Definitivamente, esta situación se agrava cada vez más como lo es el caso de estas madres encarceladas que se ven obligadas a atravesar por muchas experiencias propias de esta fase maternal, porque supone la crianza y cuidados de una criatura en estado de privación de libertad por parte de la madre.

El proyecto investigativo que nos ocupa justifica la necesidad y pertinencia de un estudio específico sobre la situación de aquellas mujeres privadas de libertad, especialmente aquellas privadas que se encuentran en el ejercicio de maternidad y periodo de lactancia dentro de los centros femeninos en Panamá. Dicha investigación da a conocer que una de las poblaciones más vulnerables y afectadas es la constituida por las mujeres gestantes, mujeres lactantes, y los niños y las niñas que conviven con estas en los establecimientos penitenciarios. Se ha evidenciado que estas personas cohabitan con condiciones caracterizadas por una falta de servicios básicos, infraestructura penitenciaria inadecuada, atención en salud básica como atención especializada y

escasez de programas de resocialización y reinserción social positiva entre otros. Son muchas las razones que justifican la necesidad de un estudio específico sobre la situación de estas mujeres privadas de libertad desde un enfoque de género y derechos humanos.

- El objetivo se centrará en comprender y visibilizar las condiciones en que se encuentran actualmente los centros femeninos donde se encuentran recluidas las privadas de libertad, específicamente aquellas mujeres gestantes, madres lactantes junto a sus hijos/as que cohabitan con las mismas en estos establecimientos penitenciarios de Panamá, en el que se visualicen sus principales problemáticas, desafíos y afectaciones a sus derechos y garantías fundamentales.

MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL

La Constitución Política de la República de Panamá, establece que es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República. Uno de los aspectos más importantes de la vida en los sistemas penitenciarios es el derecho a la salud y el Estado en su condición de tutor es el responsable de asegurar los derechos más fundamentales del hombre. En este caso de las personas privadas de libertad, tanto para facilitar los niveles adecuados de salud, como las condiciones de vida, y garantizar tratos que no menoscaben la salud de los internos.

La existencia y funcionamiento del sistema penitenciario panameño tiene su fundamento legales en distintos instrumentos jurídicos, tales como la Constitución Política de Panamá, la Ley 55 de 2003 y el Reglamento Penitenciario entre otros convenios internacionales como lo son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Las Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, convenios internacionales y otras leyes nacionales, que si bien es cierto, no fueron concebidas para regular directamente nuestro sistema penitenciario, ofrecen un marco general en apego al respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Constitución Política de la República de Panamá

Nuestro marco jurídico constitucional reconoce que es deber del Estado la protección de la maternidad y la familia en el Título III Derechos y Deberes Individuales y Sociales, Capítulo I Garantías Fundamentales específicamente en su artículo 56 donde expresa lo siguiente:

“Artículo. 56. El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La Ley determinará lo relativo al estado civil.” (Constitución Política de Panamá)

Vemos que el artículo 56 de nuestra Constitución menciona la maternidad y la familia y

es aquí donde se deriva la maternidad en cuanto a la lactancia materna siendo esta una garantía constitucional, por lo tanto, es un derecho humano que se asocia al derecho a la vida, la salud, la alimentación y la protección de la maternidad. Dicho lo anterior, la maternidad y la lactancia debe ser garantizada en todo momento porque es función del Estado velar por la salud de la población de la República. De igual modo, tienen derecho a que se les proteja, además tiene la obligación de que se les conserve su salud para el bienestar físico, mental y social de la madre y el niño o la niña. El Título III Derechos y Deberes Individuales y Sociales, Capítulo VI Salud, Seguridad Social y Asistencia Social específicamente en su artículo 109 expresa lo siguiente:

“Artículo 109. *Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República.*” (Constitución Política de Panamá)

Por lo tanto, las privadas de libertad que se encuentren en detención provisional o bien sea cumpliendo una sentencia condenatoria no son una excepción porque siguen siendo sujetos de derecho. En este mismo escenario el Título III Derechos y Deberes Individuales y Sociales, Capítulo VI Salud, Seguridad Social y Asistencia Social específicamente en su artículo 110 en su numeral 3 expresa lo siguiente:

“Artículo 110. *En materia de salud, corresponde primordialmente al Estado el desarrollo de las siguientes actividades, integrando las funciones de prevención, curación y rehabilitación:*

Numeral 3. *Proteger la salud de la madre, del niño y del adolescente, garantizando una atención integral durante el proceso de gestación, lactancia, crecimiento y desarrollo en la niñez y adolescencia.*” (Constitución Política de Panamá)

Conviene recordar, que a pesar de que las madres privadas de libertad que se encuentren en detención provisional o cumpliendo una sentencia condenatoria y estas estén en periodo de embarazo y lactancia materna al ser estos sujetos de derechos el sistema penitenciario se fundamentará en los principios de seguridad, rehabilitación y defensa social.

También prohibirá que se apliquen medidas que puedan lesionar su integridad física, mental o moral de las detenidas así lo indica el Título III Derechos y Deberes Individuales y Sociales, Capítulo I Garantías Fundamentales, específicamente en su artículo 28 donde expresa lo siguiente:

“Artículo 28. *El sistema penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social. Se prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos.*” (Constitución Política de Panamá)

LEY N°55 DE 30 DE JULIO DE 2003 O LEY PENITENCIARIA

Ley 55 de 30 de julio de 2003 o Ley Penitenciaria que Reorganiza el Sistema Penitenciario.

Es la normativa que en la actualidad regula al Sistema Penitenciario panameño. Esta Ley fue promulgada el 30 de julio de 2003, y deroga la Ley 87 de 1 de julio de 1941 que, hasta dicha fecha, regulaba nuestro sistema penitenciario panameño. Esta Ley adopta recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y una serie de Principios Para La Protección de Personas Sometidas a prisión. Tal como lo establece el Título VI Disposiciones Finales, específicamente en su artículo 129 donde expresa lo siguiente:

“Artículo 129. El Sistema Penitenciario se desarrollará, reglamentará y aplicará, de acuerdo con las garantías y dentro de los límites establecidos en la Constitución Política, leyes, tratados internacionales, decretos y reglamentos, de conformidad con las resoluciones y sentencias emanadas de los tribunales de justicia.” (Ley 55 de 30 de julio de 2003)

Definición de Centro Penitenciario

Los centros penitenciarios hacen referencia al espacio físico destinado para el cumplimiento de la prisión preventiva, así como para la ejecución de penas. De acuerdo a la Ley 55 de 30 de julio de 2003, en su Título III Centros Penitenciarios, Capítulo I Denominación y Clasificación, específicamente en su artículo 42 donde expresa lo siguiente:

“Artículo 42. Se denominan genéricamente centros penitenciarios, los lugares o establecimientos donde deben permanecer custodiadas las personas privadas de su libertad en razón de detención preventiva, así como las condenadas al cumplimiento de penas privativas de libertad o cualquier otra medida cautelar, ordenadas o decretadas por autoridad o tribunal competente, y cuyo principal objetivo es la resocialización de éstas.” (Ley 55 de 30 de julio de 2003)

Clasificación de los Centros Penitenciarios

La legislación penitenciaria panameña clasifica los centros penitenciarios de acuerdo a su destino de servicio de la siguiente manera: Centro de Detención Preventiva, Centro de Cumplimiento de Penas, Centro de Privación Abierta, Centro Femenino y Centro de Reinserción Social.

La Ley 55 de 30 de julio de 2003, en su Título III Centros Penitenciarios, Capítulo I Denominación y Clasificación, específicamente en su artículo 43 expresa lo siguiente:

“Artículo 43. Los centros penitenciarios, de acuerdo con su destino de servicio, serán clasificados de la siguiente manera:

- 1. Centros de Detención Preventiva (CDP). Los destinados a la custodia provisional de las personas sometidas a dicha medida cautelar, dictada por autoridad competente.*
- 2. Centros de Cumplimiento de Penas (CCP). Aquellos destinados a la ejecución de penas*

privativas de libertad y que se organizarán conforme al sistema penitenciario progresivo técnico, cuyo principal objetivo es la readaptación social del privado o la privada de libertad. Se ubicará en módulos especiales a las personas que cumplan penas no mayores de un año y a las sancionadas por faltas administrativas.

3. *Centros de Prisión Abierta (CPA). Los que se caracterizan por la ausencia de precauciones materiales y físicas contra la evasión, así como por un régimen fundado en una disciplina aceptada y en el sentimiento de la responsabilidad del privado o la privada de libertad respecto a la comunidad en que vive.*
4. *Centros Femeninos. Los destinados a la atención de mujeres y en los que existen dependencias adecuadas para la atención y cuidado de los hijos lactantes de las privadas de libertad. En los lugares en que no existan estos centros, las privadas de libertad permanecerán en dependencias separadas del resto de la población penal.*
5. *Centros de Reinserción Social (CRS). Dependencias destinadas al seguimiento y asistencia a las personas privadas de libertad beneficiadas con permisos de salida especiales, los cuales serán reglamentados por el Órgano Ejecutivo.” (Ley 55 de 30 de julio de 2003)*

Por consiguiente, esta Ley tiene como objetivo principal establecer principios que regularían el funcionamiento del servicio público penitenciario panameño entre muchos aspectos importantes como el tratamiento especializado de la población penitenciaria, sobre la base del respeto a los derechos humanos inherentes de toda persona. Así lo establece la Ley 55 de 30 de julio de 2003, en su Título I Disposiciones Generales, Capítulo I Principios Fundamentales y Objetivo, específicamente en su artículo 2 donde expresa lo siguiente:

“Artículo 2. *Esta Ley tiene como objetivo general establecer los principios que regularán la organización, administración, dirección y funcionamiento del servicio público penitenciario y el tratamiento especializado de la población penitenciaria, sobre la base del respeto a los derechos humanos y de los lineamientos científicos y modernos en materia criminológica, penitenciaria, de seguridad y administrativa.” (Ley 55 de 30 de julio de 2003)*

Por otra parte, las personas privadas de libertad pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojadas en diferentes establecimientos o en diferentes secciones de los establecimientos dependiendo de su situación: sexo, edad, antecedentes, condiciones de salud entre otras consideraciones rigiéndose por seis reglas a cumplir el número cuatro hace referenciar al tema que nos compete. Así lo establece la Ley 55 de 30 de julio de 2003, en su Título III Centros Penitenciarios, Capítulo II Alojamiento de los Privados o de las Privadas de Libertad, específicamente en su artículo 46 donde menciona lo siguiente:

“Artículo 46. Numeral 4: *En ningún caso, podrán estar alojados en un mismo centro*

penitenciario hombres con mujeres, ni adultos con menores de edad, excepto madres lactantes con sus niños en secciones debidamente habilitadas para tales fines.” (Ley 55 de 30 de julio de 2003)

Es una realidad que ser madre en un centro penitenciario presenta características propias, en cuanto a las comodidades y las dificultades para el ejercicio de la maternidad y lactancia. Las privadas de libertad en detención provisional o en cumplimiento de una sentencia condenatoria en periodo de lactancia deben contar con instalaciones e infraestructuras de calidad para concretar la maternidad de la mejor manera posible por su bienestar propio y la de sus hijos/as. Así lo establece la Ley 55 de 30 de julio de 2003, en su Título III Centros Penitenciarios, Capítulo II Alojamiento de los Privados o de las Privadas de Libertad, específicamente en su artículo 47 donde expresa lo siguiente:

“Artículo 47. *Los centros penitenciarios, según su clasificación, deberán contar con las siguientes instalaciones: dormitorios adecuados, servicios sanitarios y baños con la adecuada privacidad, cocina, comedores, clínicas, áreas de lactancia materna, cuartos de fórmulas, escuelas, bibliotecas, talleres adecuados a cada clase de centro, instalaciones deportivas y religiosas, áreas recreativas y de relaciones familiares, áreas de visitas y de visitas conyugales, y todos aquellos otros servicios que sean necesarios para desarrollar una eficaz actividad de custodia y tratamiento penitenciario integral.”*(Ley 55 de 30 de julio de 2003)

Hay que destacar que la Ley 55 del 30 de julio de 2003 señala que toda privada de libertad tiene derechos que se encuentran establecidos en el Título IV Régimen Penitenciario, Capítulo V Derechos y Obligaciones de la Población Penitenciaria, Sección 1ª Derechos, artículo 68 específicamente en su numeral 6 y 7 donde expresa lo siguiente:

“Artículo 68. *Todo privado o privada de libertad tiene derecho a lo siguiente:*

Numeral 6. Las privadas de libertad embarazadas tienen el derecho a que se les brinde la atención médica especializada durante su gestación, parto y puerperio, así como a recibir los servicios médicos, ginecológicos y obstétricos que correspondan. Además, esta atención especializada debe extenderse a los hijos de las privadas de libertad que habitan en el hogar maternal, el cual debe existir en todo centro penitenciario femenino.”

“Numeral 7. *La privada de libertad embarazada tiene derecho a que se le exima de toda modalidad de tratamiento incompatible con su estado, cuarenta y cinco días antes y seis meses después del parto. La privada de libertad lactante tiene derecho a que se le brinden todas las facilidades para proporcionar la leche materna a su hijo hasta los seis meses.”* (Ley 55 de 30 de julio de 2003)

Este instrumento jurídico, es claro al señalar en sus disposiciones, que las madres embarazadas o que se encuentren en periodo de lactancia dentro de los centros penales tienen derechos y garantías fundamentales al igual que los niños que las acompañan. Es el Estado quien deberá garantizar todos los servicios de salud que estos necesiten, es por eso, que deben ser brindados en los centros penitenciarios.

En Panamá, los centros penitenciarios en lo que respecta a atención médica se realizan en coordinación con el sistema de salud pública lo que conocemos hoy día como el Ministerio de Salud (MINSA), de manera que las políticas y prácticas de salud pública sean incorporadas en los lugares de privación de libertad.

Decreto Ejecutivo 393 de 25 de julio de 2005 o Reglamento Penitenciario.

El decreto ejecutivo 393 de 25 de julio de 2005, es un instrumento jurídico que reglamenta el sistema penitenciario panameño. En este instrumento jurídico se reglamenta el contenido de la Ley 55 de 2003, tal como se ordena en su artículo 132, estableciendo los procedimientos de gestión de las instituciones creadas por ella; se prevén los mecanismos para la separación y clasificación de los privados de libertad en los centros penitenciarios; el manejo de los detenidos preventivos y condenados; los mecanismos de traslados y comisiones fuera y dentro de los establecimientos penales; los conductos para la tramitación de quejas y recursos administrativos; los procedimientos y requisitos para la concesión de permisos especiales, libertad condicional y otros beneficios; los mecanismos para el control y concesión de visitas; así como el desarrollo de un sistema doble de seguridad, denominado externa e interna. El Reglamento Penitenciario, al igual que la Ley Penitenciaria, han sido elaborados de tal forma, que permita su consulta de manera sencilla al público penitenciario, ya que explica detalladamente, cómo se debe atender cualquier actividad penitenciaria.

Concepto de privado o privada de libertad

En términos generales un privado o privada de libertad es aquella persona que está presa o encarcelada. Dentro del Decreto Ejecutivo 393 de 25 de julio de 2005, el concepto de privado o privada de libertad podemos encontrarlo expreso en Título I Disposiciones Generales, Capítulo I Principios Fundamentales y Objetivos específicamente en el artículo 3, donde define privado o privada de libertad de la siguiente manera:

“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por privado o privada de libertad la persona sujeta a custodia en cualesquiera de los centros penitenciarios del país, por mandato de autoridad competente.” (Decreto Ejecutivo 393 de 25 de julio de 2005)

Ingreso de internas con hijos menores de seis meses

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 393 de 25 de julio de 2005, las mujeres que se encuentran privadas de libertad o cumpliendo una sentencia condenatoria la dirección del centro penitenciario permitirá el ingreso de niños menores de seis meses, los mismos tienen el derecho a recibir las atenciones dependiendo de sus necesidades. Se le garantizará a la madre ejercer la guarda y custodia de sus hijas o hijos menores de seis años, de esta manera vemos que tanto la madre como el niño tienen derecho a que sean ubicados en el hogar maternal garantizando los derechos del niño velando siempre por el interés superior de estos menores lactantes. Por su parte, la autoridad penitenciaria tiene el deber de ingresar a la madre junto con su hijo al hogar maternal. El Decreto Ejecutivo 393 de 25 de julio de 2005, menciona en su Título II Organización de los Centros Penitenciarios, Capítulo III Ingreso, Registro y Clasificación de ellos Privados o Privadas de Libertad, Sección 1° Del Ingreso en un Centro Penitenciario, específicamente en su artículo 26 numerales 1, 5 y 6 onde señala lo siguiente:

“Artículo 26. *Ingreso de internas con hijos menores de seis meses:*

1. *La dirección del centro penitenciario admitirá en el a los hijos de internas que no superen los seis meses de edad. Si las acompañasen en el momento del ingreso, el menor, junto a la madre, ingresará de inmediato en el hogar maternal, realizándose los tramites de ingreso en los locales de esta área, si fue posible.*
5. *Los centros penitenciarios femeninos dispondrán de un local adaptado como hogar maternal, que contará con guardería infantil, dependiente de la clínica penitenciaria, estará arquitectónicamente separado del resto de ellos módulos del centro y atendido por personal especializado en la atención de lactantes, a fin de garantizar la atención medico sanitaria del menor.*
6. *Si el niño ingresa en un centro penitenciario en el que no exista hogar maternal, será trasladado junto a la madre, de forma inmediata, a un centro penitenciario que disponga de hogar maternal.”* (Decreto Ejecutivo 393 de 25 de julio de 2005)

En términos generales un hogar maternal dentro de los centros penales es un establecimiento no hospitalario para dar protección a la mujer embarazada y lactantes. Estos hogares maternales se encargan de prestar atención prenatal y atención obstétrica de urgencia. En este mismo sentido, estos hogares tienen la finalidad de que los hijos de las mujeres privadas de libertad puedan permanecer con ellas y cuenten con condiciones adecuadas para su desarrollo.

Centros Femeninos en Panamá

- Centro Femenino de Rehabilitación Nueva Esperanza, provincia de Colón: El Centro Penitenciario de Nueva Esperanza, se encuentra ubicado en Cristóbal, en la Comunidad

de Nueva Esperanza, Distrito Omar Torrijos Herrera, Provincia de Colón, y fue construido en el año 2016.

- Centro Femenino de Rehabilitación de Algarrobos, provincia de Chiriquí: El Centro Femenino de Chiriquí se encuentra ubicado en la comunidad de Los Algarrobos, Distrito de Dolega, Provincia de Chiriquí, y fue construido en el año 1991.
- Centro Femenino de Rehabilitación de Llano Marín, provincia de Coclé: El Centro Penitenciario de Llano Marín, se encuentra ubicado en la Comunidad de Llano Marín, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé, e inicio como proyecto en el año 1992. En el año 2003 se habilitaron los talleres y oficinas masculinas. En el año 2006 se habilitó la sección para recluir a las mujeres privadas de libertad.
- Centro Femenino de Rehabilitación de Panamá (CEFERE), provincia de Panamá: El Centro Femenino de Rehabilitación Doña Cecilia Orillac De Chiari, se encuentra ubicado en la Avenida Domingo Díaz, en el Distrito de Panamá y fue construido en el año 1962.
- Centro Femenino de Rehabilitación de Guararé, provincia de Los Santos.

CÓDIGO PROCESAL DE PANAMÁ

Ley N°63 de 28 de agosto de 2008

El Código Procesal Penal, consagra garantías, principios y reglas que toda persona privada de libertad que se encuentre en detención provisional tiene derecho. Este código establece la obligación del Estado de asegurar un trato digno y con pleno respecto a los derechos de las personas privadas de libertad.

El Código Procesal Penal hace referencia aquellos principios fundamentales que protegen a los privados y privadas de libertad en detención provisional siendo estos sujetos de derechos. Cabe señalar que el principio de control judicial de afectación de derechos fundamentales nos dice que las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal o de otros derechos son excepcionales y la autoridad competente, en este caso un Juez de Garantías al decretar algunas de estas medidas, analizará el carácter excepcional, provisional, humanitario de estas. Tal lo expresa el Libro Primero Disposiciones Generales, Título I Garantías, Principios y Reglas, Capítulo I, específicamente en su artículo 3 y 12 donde expresa lo siguiente:

“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por privado o privada de libertad la persona sujeta a custodia en cualesquiera de los centros penitenciarios del país, por mandato de autoridad competente.” (Decreto Ejecutivo 393 de 25 de julio de 2005)

“Artículo 12. Control judicial de afectación de derechos fundamentales. Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal o de otros derechos son excepcionales. El Juez de

Garantías, al decretar alguna de estas medidas, observará el carácter excepcional, subsidiario, provisional, proporcional y humanitario de estas.” (CPP de Panamá)

El Juez de Garantías es un juez cuyo rol fundamental es cautelar el respeto a las garantías y derechos del imputado y la legalidad del proceso investigativo desarrollado por el Ministerio Público. En el Título II Jurisdicción Penal, Capítulo II Tribunales Competentes dentro del artículo 44 del Código Procesal Penal establece la competencia del Juez de Garantías de la siguiente manera:

“Artículo 44. *Competencia del Juez de Garantías. Es competencia de los Jueces de Garantías pronunciarse sobre el control de los actos de investigación que afecten o restrinjan derechos fundamentales del imputado o de la víctima, y sobre las medidas de protección a estas.” (CPP de Panamá)*

El Código Procesal Penal, señala la excepcionalidad de la detención provisional ya que las detenciones provisionales en los centros penitenciarios solo se pueden determinar cuándo alguna medida cautelar no haya resultado la adecuada en el proceso. Hay que destacar que la excepcionalidad de la detención provisional, de existir medidas cautelares de relevancia no se decretará cuando la persona imputada sea una mujer que este embarazada o en periodo de lactancia. Dentro del Código Procesal Penal, Libro Segundo, Título V, Medidas Cautelares, Capítulo I, Medidas Cautelares personales, Sección 1º Aprehensión Policial y Detención Preventiva, específicamente en su artículo 238 señala lo siguiente:

“Artículo 238. *Excepcionalidad de la detención provisional. La detención provisional en establecimientos carcelarios solo podrá decretarse cuando todas las otras medidas cautelares resulten inadecuadas. Si el imputado fuera una persona con discapacidad, se tomarán las precauciones especiales que el caso requiera para salvaguardar su integridad personal. Salvo que existan exigencias cautelares de excepcional relevancia, no se decretará la detención provisional cuando la persona imputada sea una mujer embarazada o que amamante su prole, una persona que se encuentre en grave estado de salud, una persona con discapacidad y con un grado de vulnerabilidad o una persona que haya cumplido los setenta años de edad.” (CPP de Panamá)*

Por otro lado, el Código Procesal Penal de Panamá hace su pronunciamiento acerca de respetar los derechos humanos. Dentro del artículo 14 del del Código Procesal Penal de hace señalamientos de que estos derechos humanos son mínimos, prevalentes y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.

“Artículo 14. *Respeto a los derechos humanos. Las partes en el proceso penal serán tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Los derechos y las garantías que*

consagran la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y este Código deben considerarse como mínimos, prevalentes y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.” (CPP de Panamá).

CÓDIGO PENAL DE PANAMÁ

Si bien es cierto, la Constitución Política de Panamá, no se hace, explícitamente, un reconocimiento a los derechos humanos y garantías individuales consignadas en tratados, convenios y pactos internacionales sobre la materia, el capítulo I del Título III de la Constitución que hace referencia a las garantías fundamentales. Probablemente, debido a esta ausencia de referencia directa con lo que respecta a tratados, convenios o pactos, a los cuales forma parte Panamá concernientes a los derechos humanos, y para especificar en mayor grado el respeto a los mismos el Código Penal de Panamá señala los derechos humanos y las garantías constitucionales. El Código Penal de Panamá en el Libro I La Ley Penal en General, Título Preliminar, Capítulo I Postulados Básicos, específicamente en el artículo 5 expresa lo siguiente:

“Artículo 5. Las normas y los postulados sobre derechos humanos que se encuentren consignados en la Constitución Política y en los convenios internacionales vigentes en la República de Panamá son parte integral de este Código. Además, son mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.” (Código Penal de Panamá)

LAS REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS (LAS REGLAS NELSON MANDELA)

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (RM) constituyen los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo.

La regla #28 de las Reglas mínimas del Tratamiento de los Reclusos hace referencia a que los centros penitenciarios femeninos deben contar con espacios físicos especiales para el debido cuidado de aquellas privadas de libertad y estas estén en estado de embarazo y consigo periodo de lactancia. También podemos observar que esta regla hace énfasis en el nacimiento mismo del niño procurando que este nazca en un hospital civil salvaguardando todos sus derechos velando siempre por el interés superior del menor. Tal lo podemos ver expreso de la siguiente manera:

“Artículo 5. Las normas y los postulados sobre derechos humanos que se encuentren consignados en la Constitución Política y en los convenios internacionales vigentes en la República de Panamá son parte integral de este Código. Además, son mínimos y no excluyentes de otros que

incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.”

“Regla #28.

En los establecimientos penitenciarios para mujeres habrá instalaciones especiales para el cuidado y tratamiento de las reclusas durante su embarazo, así como durante el parto e inmediatamente después. En la medida de lo posible, se procurará que el parto tenga lugar en un hospital civil. Si el niño nace en prisión, no se hará constar ese hecho en su partida de nacimiento.”
(Reglas mínimas del Tratamiento de los Reclusos)

Dentro de Reglas mínimas del Tratamiento de los Reclusos en su regla # 29 establece que los niños pueden permanecer con su madre en el establecimiento penitenciario motivado por el interés superior del menor, de ser así, estos se les facilitara servicios internos o externos de guardería cuando estos no se puedan ser atendidos por su madre, revisión médica, entre otros. Es importante traer a colación que todo niño que vivan dentro del establecimiento penitenciario no puede por ningún motivo ser tratados como reclusos.

“Regla #29.

- 1. Toda decisión de permitir que un niño permanezca con su madre o padre en el establecimiento penitenciario se basará en el interés superior del niño. Cuando los niños puedan permanecer con su madre o padre, se tomarán disposiciones para: a) Facilitar servicios internos o externos de guardería, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por su madre o padre; b) Proporcionar servicios de atención sanitaria especiales para niños, incluidos servicios de reconocimiento médico inicial en el momento del ingreso y servicios de seguimiento constante de su desarrollo a cargo de especialistas.*
- 2. Los niños que vivan en el establecimiento penitenciario con su madre o padre nunca serán tratados como reclusos.”* (Reglas mínimas del Tratamiento de los Reclusos)

Reglas de Bangkok

Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes, denominadas Reglas de Bangkok. Las mujeres en situación de privación de libertad ya sea en detención provisional o cumpliendo una sentencia condenatoria, es un grupo especialmente vulnerable por diversas razones. Muchas de estas privadas de libertad tienen un pasado marcado por la violencia doméstica, el uso o tráfico de drogas y la pobreza. Las Reglas de Bangkok son 70 reglas que sancionó la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 21 de diciembre de 2010, donde señalan los requisitos necesarios que se deben atender

para garantizar condiciones de vida digna para la población femenina privada de libertad.

Por consiguiente, las Reglas de Bangkok son una directriz que deben ser seguidas por la autoridad correspondiente, en este caso el sistema penitenciario, ya que contemplan los aspectos básicos que se deben ser atendidos para que se respeten y promuevan los derechos humanos de las internas y sus hijos, tales como: ingreso, registro, lugar de reclusión, higiene personal, servicios de atención a la salud orientada expresamente a la mujer, prevención, tratamiento, entre otros aspectos importantes. También cabe señalar que las reglas de Bangkok se hace referencia a las condiciones que se deben brindar a las mujeres embarazadas, lactantes y con hijos en la prisión que es en nuestro caso el tema que nos ocupa.

Las Reglas de Bangkok señala que dentro de la prisión las privadas de libertad deben contar con instalaciones en buen estado y suministro de todo artículo personal que estas requieran para satisfacer sus necesidades especialmente aquellas privadas de libertad que estén embarazadas y en periodo de lactancia. También podemos observar que las privadas de libertad tienen derecho a la atención médica según el caso y atención pediátrica si esta está acompañada por un niño. Las reglas de Bangkok en sus reglas 5 y 9 establecen lo siguiente:

“Regla #5

Los recintos destinados al alojamiento de las reclusas deberán contar con las instalaciones y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, incluidas toallas sanitarias gratuitas y el suministro permanente de agua para el cuidado personal de niños y mujeres, en particular las que cocinen, las embarazadas y las que se encuentren en período de lactancia o menstruación.” (Reglas de Bangkok)

“Regla #9

Si la reclusa está acompañada por un niño, se deberá someter también a este a reconocimiento médico, que realizará de preferencia un pediatra, a fin de determinar sus necesidades médicas y el tratamiento, si procede. Se brindará atención médica adecuada, y como mínimo equivalente a la que se presta en la comunidad.” (Reglas de Bangkok)

Dentro de las Reglas de Bangkok está establecido que las privadas de libertad tendrán acceso a programas que atiendan a las necesidades de estas específicamente aquellas las mujeres que se encuentran embarazadas y madres lactantes como también aquellas que tienen hijos, es por ello, que el régimen penitenciario tiene la tarea de habilitar servicios o adoptaran preceptos para el cuidado del niño. La regla 42 expresa lo siguiente:

“Regla #42

1. *Las reclusas tendrán acceso a un programa de actividades amplio y equilibrado en el que se tendrán en cuenta las necesidades propias de su sexo.*
2. *El régimen penitenciario permitirá reaccionar con flexibilidad ante las necesidades de las mujeres embarazadas, las madres lactantes y las mujeres con hijos. En las prisiones se habilitarán servicios o se adoptarán disposiciones para el cuidado del niño, a fin de que las reclusas puedan participar en las actividades de la prisión.*
3. *Se procurará, en particular, establecer programas apropiados para las embarazadas, las madres lactantes y las reclusas con hijos.”* (Reglas de Bangkok)

Las reglas de Bangkok hacen menciona que las privadas de libertad que están embarazadas, en periodo de lactancia y con hijos en la cárcel gozaran de programas de la salud de modo que puedan estar asesorarlas en cuanto a salud y dieta de manera gratuita. En ningún momento se impedirá que las privadas de libertad ejerzan la lactancia salvo existan impedimentos sanitarios concretos. La regla 48 establece lo siguiente:

“Regla #48

1. *Las reclusas embarazadas o lactantes recibirán asesoramiento sobre su salud y dieta en el marco de un programa que elaborará y supervisará un profesional de la salud. Se suministrará gratuitamente a las embarazadas, los bebés, los niños y las madres lactantes alimentación suficiente y puntual, en un entorno sano en que exista la posibilidad de realizar ejercicios físicos habituales.*
2. *No se impedirá que las reclusas amamenten a sus hijos, a menos que existan razones sanitarias concretas para ello.*
3. *En los programas de tratamiento se tendrán en cuenta las necesidades médicas y de alimentación de las reclusas que hayan dado a luz recientemente y cuyos bebés no se encuentren con ellas en la prisión.”* (Reglas de Bangkok)

La lactancia materna podríamos considerarlo como parte de los derechos humanos fundamentales de madres y que no debería por ningún motivo ser vulnerado ni siquiera en situación de encarcelamiento, ya que al estar en detención provisional o cumpliendo una sentencia condenatoria da lugar a graves riesgos para la salud tanto para la privada de libertad embarazada como de su embarazo en sí y constituye una violación de su dignidad humana. Vemos que las reglas de Bangkok, señala claramente que dentro del sistema penitenciario se deben proveer adaptaciones para la lactancia materna a las privadas de libertad encarceladas que las necesitan especialmente a aquellas que están en embarazo o en periodo de lactancia materna.

RELACIÓN MADRE E HIJOS EN INSTITUCIONES PENITENCIARIA

Sin duda, el vínculo madre-hijo dentro del sistema penitenciario es de sumamente importante y especial para la mujer privada de libertad puesto que mantener una relación de cercanía con sus hijos/as es fundamental dentro de este contexto, donde la hostilidad se vive constantemente, mantener una relación de cercanía con sus hijos/as es un elemento considerado esencial, que les ayuda a sobrellevar el encierro por una detención provisional o que las mismas estén cumpliendo una sentencia condenatoria.

Convenio Belem Do Pará

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “*Convención de Belém Do Pará*”, fue suscrita en el XXIV Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1994, en Belém Do Pará, Brasil. Ratificada por Panamá, mediante la Ley No. 12 del 20 de abril de 1995.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer mejor conocida como convención de Belém do Pará establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, es por ello que esta convención reconoce y protege sus derechos. La Convención visibiliza tres ámbitos donde se manifiesta esta violencia: En la vida privada, En la vida pública y Perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.

Los derechos que esta Convención consagra podemos verlos dentro de los artículos 3 hasta el 6 estos derechos humanos y libertades establecidos en los instrumentos jurídicos tanto nacional como internacional en Capítulo II Derechos protegidos, específicamente en el artículo 4 literales a,b,d,e, y f donde desglosa estos derechos entre ellos se pueden mencionar: El derecho a que se respete su vida; el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; el derecho a la libertad y a la seguridad personales; el derecho a no ser sometida a torturas; el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona, que se proteja a su familia y el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley.

“Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.” (Convención de Belém do Pará).

“Artículo 4. *Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:*

- a. el derecho a que se respete su vida;*
- b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;*
- d. el derecho a no ser sometida a torturas;*
- e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;*
- f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley...”* (Convención de Belém do Pará).

La Convención de Belém do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece una serie de derechos a que las mujeres tienen derecho y las mujeres que se encuentran en detención provisional o cumpliendo una sentencia condenatoria no son excluyentes, debido a su calidad de privadas de libertad.

El cumplimiento de estos derechos humanos que goza toda mujer dentro de un sistema penitenciario puede darse únicamente mediante el respeto de los derechos humanos de los reclusos y reclusas como base; toda vez que es mediante el reconocimiento de su dignidad humana, que se pueden cubrir sus necesidades de manera efectiva y, por lo tanto, generarle un sentimiento de bienestar: condición absolutamente necesaria para reformar las conductas delictivas de los mismos y evitar su reincidencia.

Toda mujer tiene derecho a que se le respete su vida aun estando dentro de un sistema penitenciario esto significa que por ningún motivo se debe atentar contra la vida humana ni ponerla en peligro. Por otra parte, todas las mujeres tienen el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; sabemos que las mujeres que se encuentren en embarazo o en periodo de lactancia están vulnerables en su condición física, por lo que debe garantizarse el mejor de los tratos hacia su persona de tal modo el niño o la niña no se vean afectados por estos aspectos, que sin duda la madre puede estar expuesta dentro del centro penitenciario.

El derecho a no ser sometida a torturas; está vinculado al tratamiento mínimo de los reclusos, tal como lo mencionamos antes en las reglas de Nelson Mandela ya que ninguna persona detenida será sometida a tortura física o mental ni será tratada de manera cruel, inhumana o degradante dentro del sistema penitenciario y finalmente el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; cabe señalar que toda persona tiene derecho al respeto de

su honra y que se le reconozca su dignidad ya que ninguna reclusa puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas dentro de las instalaciones penitenciarias.

Es un hecho que la violencia contra las mujeres contraviene el derecho de toda persona a ser tratada con dignidad y respeto, en un entorno libre de violencia y discriminación. La Convención de Belém do Pará es un tratado internacional que ha dado pauta para la adopción de leyes y políticas sobre prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en los Estados Parte de la Convención; y ha sido un aporte significativo al fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (ONU, 1979).

Ley 4 (de 22 de mayo de 1981)

La Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer es el instrumento vinculante, universalmente reconocido, que no solo lucha contra la discriminación de la mujer, sino que también protege los derechos de las niñas para preservar su dignidad y bienestar; asimismo, alienta todas las políticas públicas que les puedan ofrecer oportunidades de igualdad.

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo.

“Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” (Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer)

“Artículo 12

- 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.*

2. *Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.”* (Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer)

Este instrumento jurídico internacional es el primer instrumento que reconoce explícitamente las condiciones estructurales de desventaja de las mujeres, considera las diferentes formas de discriminación que viven y establece parámetros de políticas públicas para combatir las.

Es una realidad, que las mujeres en prisión que se encuentren en detención provisional o estén cumpliendo una sentencia condenatoria que se encuentren en periodo de embarazo o lactando dentro de estos establecimientos penitenciarios tienen más necesidades de asistencia sanitaria básica en comparación con el resto de la población de reclusas. Es posible que una mujer dentro del centro penitenciario tenga la necesidad de atención obstétrica o relacionado a lactancia materna, que no haya sido tratada antes de su internamiento debido a la discriminación a la hora de acceder a unos servicios sanitarios adecuados.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado por Panamá, mediante la Ley No. 15 de 28 de octubre de 1976 (G.O. No. 18,373 de 18 de julio de 1977) y, con el correr de los años, su creciente importancia para la promoción y defensa de los Derechos Humanos, ha sido notable.

Las mujeres privadas de libertad que se encuentren en detención provisional tienen derecho a que se les proteja su integridad personal y aún más cuando estas estén en estado de embarazo o lactando dentro del centro penitenciario ya que basándonos en este instrumento jurídico, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen estos derechos como lo son el derecho a la integridad física debido a que estas privadas por ningún motivo deben ser sometidas a torturas, como también el derecho a la igualdad y a no ser discriminadas por su raza, color o cualquier condición social.

Dentro del presente pacto, los estados partes se comprometen a garantizar todas estas garantías constitucionales que goza toda persona, podemos observarlo en la parte II, específicamente en el artículo 2, numeral 1 donde expresa lo siguiente:

“Artículo 2. *Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a*

garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10, hace referencia al trato que deben de tener toda persona que se encuentra detenida provisionalmente, pues tienen derecho a un trato humano y respetuoso en cuanto a su dignidad humana inherente de toda persona. También el pacto es claro al mencionar que aquellos procesados tendrán un trato especial, desde el punto de vista, de privada de libertad que estén en periodo de lactancia o embarazo vemos que el pacto señala que estos privados estarán separados del resto de los condenados salvo excepciones de tal modo que se pueda garantizar su condición.

“Artículo 10

1. *Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.*
2. *a. Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas...”* (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Constitución Política de la República Panamá. Procuraduría General de la Nación (n.d.). Constitución Política de Panamá. Ministerio Público. <https://ministeriopublico.gob.pa/>
- Código Penal. Procuraduría General de la Nación (n.d.). Código Penal de Panamá. Ministerio Público. <https://ministeriopublico.gob.pa/>
- Código Procesal Penal. Procuraduría General de la Nación (n.d.). Código Procesal Penal de Panamá. Ministerio Público. <https://ministeriopublico.gob.pa/>
- Convención Americana de Derechos Humanos. (n.d.). Carta Internacional de Derechos Humanos. NACIONES UNIDAS. https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage?gclid=CjwKCAjwpuajBhBpEiwA_VmvpVTVwgeTU9OYtADGR64bJxWv55TC30DaCCC9wTI5luDFsxIhoC9CEQAvD_BwE
- Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) - Manual de Educación en los Derechos Humanos con jóvenes - www.coe.int. (s/f). Manual de Educación en los Derechos Humanos con jóvenes. Recuperado

el 30 de junio de 2023, de <https://www.coe.int/es/web/compass/convention-on-the-elimination-of-racism-and-discrimination>

- Convención de los Derechos del Niño (n.d.). Convención sobre los Derechos del Niño. NACIONES UNIDAS. https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage?gclid=CjwKCAjwpuaJBhBpEiwAVmvpVTVwgeTU9OYtADGR64bJxWv55TC30DaCCC9wTl5luDFsxIhoC9CEQAvD_BwE
- Convención Belem do Pará. CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER “CONVENCION DE BELEM DO PARA”. (s/f). Oas.org. Recuperado el 1 de junio de 2023, de <https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>
- Decreto 393 de 2005 que Regula el Sistema Penitenciario. (n.d.). Decreto 393 de 2005 que Regula el Sistema Penitenciario. MINISTERIO DE GOBIERNO. <https://www.mingob.gob.pa/direccion-general-del-sistema-penitenciario/>
- Ley N°55 del 30 de julio del 2003 (Que reorganiza el Sistema Penitenciario) (n.d.). Ley N°55 del 30 de julio del 2003 (Que reorganiza el Sistema Penitenciario). MINISTERIO DE GOBIERNO. <https://www.mingob.gob.pa/direccion-general-del-sistema-penitenciario/>
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (S/f-b). Corteidh.or.cr. Recuperado el 13 de junio de 2023, de <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r29904.pdf>
- Reglas Mínimas Para el Tratamiento de los Reclusos. (S/f). Unodc.org. Recuperado el 10 de junio de 2023, de https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf

NORMAS PARA AUTORES

1. Todos los trabajos serán consignados a través de la dirección electrónica del sistema de revistas de UMECIT en la dirección electrónica: revistas.umecit.edu.pa, para lo cual el autor debe registrarse previamente en la revista. Al hacer la entrega es necesario llenar la lista de comprobación de envíos, adjuntarla y asegurar lo siguiente: el artículo es original; no ha sido publicado anteriormente, ni se ha remitido previamente a otra revista; el documento se encuentra en formato Word; cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las normas de la revista, las cuales están basadas en la norma APA versión 2018.

2. Los trabajos deben versar sobre investigaciones, ensayos o artículos teóricos en el área de la especialización de la revista: Derecho y Ciencias Forenses.

3. Debe contener el nombre y apellido del autor o autores, indicando su adscripción institucional (centro de trabajo), país de origen y dirección de correo electrónico (información indispensable). Adicional, debe anexar fotografía tamaño carnet en formato digital del autor o los autores. La fotografía debe conservar un estilo académico.

4. Los trabajos se presentarán en español. El resumen debe estar adicionalmente traducido al inglés (abstract). La extensión oscilará entre cien (100) y trescientas (300) palabras; asimismo debe contener entre tres (3) y cinco (5) palabras claves como máximo y también deben estar traducidas al inglés en la página del abstract. La extensión aceptada será entre 10 y 20 páginas, con una tipografía Times new roman, tamaño 12 puntos.

5. En la redacción de los aportes, se debe emplear un lenguaje formal, simple y directo, evitando en lo posible el uso de expresiones poco usuales, retóricas o ambiguas, así como también el exceso y abuso de citas textuales.

6. El documento se debe redactar en tercera persona o en infinitivo, excepto los trabajos bajo el enfoque cualitativo o la producción escrita que corresponde a trabajos de divulgación o de otros saberes, en los cuales se permitirá la redacción total o parcial en primera persona, según el estilo del autor.

7. En el texto principal, se debe evitar el uso excesivo o inadecuado de letras en estilo negritas, itálicas o cursivas, excepto los términos en latín y las palabras extranjeras que deberán figurar en letra itálica o cursiva.

8. La primera vez que se use una abreviatura, esta deberá ir entre paréntesis, en lo sucesivo, se recurrirá únicamente a la abreviatura.

9. En caso de que el trabajo posea tablas, figuras o gráficos, los mismos deben enumerarse según el orden en el que aparecen en el texto, con número arábigos, seguido de un título breve. Al final se debe indicar la fuente (obligatorio)

10. Las citas textuales deben aparecer en el texto en el siguiente formato, según la forma de citación, tal como lo establece la norma APA:

Ejemplo 1: Al hablar del concepto de Investigación y según Tamayo y Tamayo (2007): “Son muchos los conceptos que sobre la investigación científica...” (p. 37)

Ejemplo 2: Al hacer referencia al concepto de investigación encontramos que: “Son muchos los conceptos que sobre la investigación científica...” (Tamayo y Tamayo, 2007, p.37)

Si la cita tiene más de 40 palabras debe escribirse en un párrafo aparte, sin comillas, alineado a la izquierda y con un margen de 2,54 cm o 5 espacios de tabulador. Todas las citas deben ir a doble espacio.

Solo puede omitirse de forma deliberada el número de página es en los de paráfrasis y esto cuando se estén resumiendo varias ideas expresadas a lo largo de toda una obra y no una idea particular fácilmente localizable en la fuente citada.

Asimismo, deben aparecer en la lista de referencias bibliográficas al final del trabajo (y viceversa). Observe cuidadosamente que todas las referencias estén señaladas, que la ortografía de los nombres de los autores corresponda y que las fechas dadas en el texto son las mismas que las que están en las referencias.

Otras normas de citados son las siguientes:

- Dos autores: Machado y Rodríguez (2015) afirma... o (Machado y Rodríguez, 2015, p.20)
- Tres a cinco autores: cuando se citan por primera vez se nombran todos los apellidos, luego solo el primero y se agrega et al. Machado, Rodríguez, Álvarez y Martínez (2015) aseguran que... / En otros experimentos los autores encontraron que... (Machado et al., 2015)
- Seis o más autores: desde la primera mención se coloca únicamente apellido del primero seguido de et al.
- Autor corporativo o institucional con siglas o abreviaturas: la primera citación se coloca el nombre completo del organismo y luego se puede utilizar la abreviatura. Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, 2016) y luego OPEP (2016); Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) y luego OMS (2014).
- Autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas: Instituto Cultural (2012), (Instituto Cultural, 2012).

- Dos o más trabajos en el mismo paréntesis: se ordenan alfabéticamente siguiendo el orden de la lista de referencias: Mucho estudios confirman los resultados (Ceballos, 2012; Paz, 2014; Rodríguez, 2014 y Zamora, 2015).
- Fuentes secundarias o cita dentro de una cita: Carlos Portillo (citado en Rodríguez, 2015)
- Obras antiguas: textos religiosos antiguos y muy reconocidos. (Corán 4:1-3), Lucas 3:2 (Nuevo Testamento). No se incluyen en la lista de referencias.
- Comunicaciones personales: cartas personales, memorándums, mensajes electrónicos, etc. Manuela Álvarez (comunicación personal, 4 de junio, 2010). No se incluyen en la lista de referencias.
- Fuente sin fecha: se coloca entre paréntesis s.f. Alvarado (s.f), Bustamante (s.f).
- Fuente anónima: se escriben las primeras palabras del título de la obra citada (Informe de Gestión, 2013), Lazarrillo de Tormes (2000).
- Citas del mismo autor con igual fecha de publicación: en estos casos se coloca sufijación al año de publicación para marcar la diferencia (Rodríguez, 2015a), (Rodríguez, 2015b). Se ordenan por título alfabéticamente, en la lista de referencias.

11. Este conjunto de normas podrá presentar variaciones con el tiempo de acuerdo a lo que establezca la Asociación Americana de Psicología (APA), por lo tanto, los cambios que se realicen en la misma, serán publicados en fecha acorde a su implantación.

12. La lista de referencias bibliográficas deben ser escritas en orden alfabético y en sangría francesa, siguiendo este estilo:

- Libro: Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial
- Libro con editor: Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.
- Libro electrónico: Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de <http://www...>
- Libro electrónico con DOI: Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx
- Capítulo de libro: únicamente en los casos de libros compilatorios y antologías donde cada capítulo tenga un autor diferente y un compilador o editor: Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial.
- Publicaciones periódicas formato impreso: Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp.
- Publicaciones periódicas con DOI: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. doi: xx
- Publicaciones periódicas online: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. Recuperado de <http://www...>
- Artículo de periódico impreso: Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp. O la versión sin autor: Título del artículo. (Fecha). Nombre del periódico, pp-pp.
- Artículo de periódico online: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del

periódico. Recuperado de <http://www...>

- Tesis de grado: Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la institución, Lugar.
- Tesis de grado online: Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Recuperado de <http://www...>
- Referencia a páginas webs: Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. Recuperado de <http://www...>
- Fuentes en CDs: Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [CD-ROM]. Lugar de publicación: Casa publicadora.
- Películas: Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director, A. (director). (Año). Nombre de la película [cinta cinematográfica]. País: productora.
- Serie de televisión: Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la serie [serie de televisión]. Lugar: Productora.
- Video: Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la serie [Fuente]. Lugar.
- Podcast: Apellido, A. (Productor). (Fecha). Título del podcast [Audio podcast]. Recuperado de <http://www...>
- Foros en internet, lista de direcciones electrónicas y otras comunidades en línea: Autor, (Día, Mes, Año) Título del mensaje [Descripción de la forma] Recuperado de <http://www...>

OTRAS CONDICIONES DE PUBLICACIÓN:

- Únicamente se recibirán trabajos originales y actualizados que representen aportaciones teóricas significativas.
- Los trabajos que resulten seleccionados para su publicación, no recibirán retribución económica o de cualquier tipo. Solo se les entregará una constancia de publicación firmada por el editor, de ser solicitada.
- Para reproducir el material publicado por la revista, el autor requiere autorización expresa del Comité Editorial de la publicación.

TIPOS DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN CATHEDRA

1. Artículos: son las producciones con categoría primaria como: reportes de investigaciones empíricas en los cuales, se dan a conocer los avances o resultados, generales o parciales, de una investigación original, en algún área del derecho y las ciencias forenses, que no hayan sido publicados anteriormente.

Las estructuras de artículos arbitrados deben cumplir las siguientes normas:

- Introducción, presentando el problema u objeto de estudio y objetivos de la investigación.
- Las teorías en la que se fundamenta el trabajo investigativo.
- Método/Metodología utilizada en la investigación.
- Resultados parciales o totales obtenidos en la investigación.
- Discusión, interpretación y argumentación de los resultados.

2. Ensayos: Es un género literario en el cual el escritor plasma sus creencias o posiciones personales, combinando de manera imbricada el conocimiento científico y la creatividad artística.

Se sustenta en los ejercicios investigativos y académicos que se presentan en forma escrita exponiendo brevemente los pensamientos y análisis del escritor respecto a un área específica del saber.

Esta tipología de publicación comparte con la ciencia, uno de sus propósitos esenciales que consiste en explorar más a fondo la realidad para aproximarse a la verdad la cual alude, bien a una persona, objeto, evento o fenómeno particular o circunstancia social destacándose, por un discurso sencillo pero, con un alto nivel lingüístico acorde con el tipo de lector al cual está dirigido.

Comprende los trabajos de: meta-análisis y evaluación crítica de investigaciones previas, literatura sobre algún área de estudio de cualquier ciencia.

Este tipo de trabajos debe, preferentemente, ofrecer el estado del conocimiento de dicho objeto de estudio; o bien, permitir la identificación de relaciones, contradicciones o inconsistencias y proponer soluciones para posteriores estudios.

Con respecto a la estructura de los Ensayos: no poseen un esquema preestablecido pues depende de la racionalidad del autor, sin embargo, el texto debe caracterizarse por la coherencia y la cohesión, fundamentado en un discurso investigativo-reflexivo considerando los antecedentes bibliográficos del tema es decir, consiste en indagar los saberes generados por otros investigadores.

3. Artículos teóricos: son trabajos en los que se analizan temas literarios o teorías sobre las temáticas de la revista contribuyen al avance del conocimiento y/o la práctica en alguna área de éste campo. En este tipo de trabajos, el autor realiza un seguimiento del desarrollo de la teoría para ampliar o refinar constructos teóricos o propuestas prácticas.

Comúnmente, en este tipo de artículos, el autor presenta una teoría nueva, pero también puede analizar las consistencias o inconsistencias de teorías ya existentes.

Estructura de los Artículos teóricos: Es similar a la utilizada en los ensayos.

PAUTAS DE ENVÍO DE LOS TRABAJOS

Como parte del proceso de envío, se requiere que los autores indiquen si su artículo cumple con los siguientes elementos: (De no ser así, el artículo será devuelto)

1. El trabajo a enviar es original.
2. El artículo a enviar no ha sido publicado anteriormente, ni se ha remitido previamente a otra revista.
3. El documento se encuentra en formato Word.
4. El texto tiene interlineado a 1,5 cms, el tipo de fuente es Times New Roman y el tamaño es 12 puntos y todas las ilustraciones, figuras y tablas están dentro del texto en el sitio que les corresponde, debidamente identificadas.
5. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las normas para autor.
6. Todo trabajo deberá ser consignado a la revista a través de la dirección electrónica del sistema de revistas de UMECIT en la dirección electrónica: revistas.umecit.edu.pa, para lo cual el autor debe registrarse previamente en la revista.
7. Una vez recibidos los trabajos, se envía acuso de recibo del manuscrito vía correo electrónico al autor.
8. Se debe adjuntar foto de los autores en formato digital, tamaño carnet.
9. Seguidamente, el Comité Editorial realiza una evaluación preliminar al manuscrito para determinar si el mismo cumple con las normas editoriales de la Revista CATHEDRA.
10. Estimada la pertinencia y constatado el cumplimiento de las normas, el Comité Editorial somete los artículos a arbitraje, mediante la modalidad doble ciego, el cual asegurará la confidencialidad del proceso, al mantener en reserva la identidad del autor o los autores y de los árbitros. Caso contrario, si el trabajo no cumple con las normas de publicación de la revista, el Comité Editorial propondrá que no sea enviado al proceso de arbitraje, y se le notificará al autor, sobre esta decisión, vía correo electrónico.
11. Lo no previsto en estas normas será resuelto por el Comité Editorial, atendiendo a los intereses de la Revista Cathedra.

NOTA DE DERECHOS DE AUTOR

El contenido de las publicaciones y los enlaces sugeridos en las mismas son responsabilidad absoluta de los autores y no de la UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (UMECIT) ni de la revista CATHEDRA. Están protegidos por leyes internacionales de derecho de autor al igual que los logos de UMECIT Y CATHEDRA, de allí que esté totalmente prohibida su reproducción.

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD

Los nombres y direcciones de correo electrónico introducidos en la revista se usarán exclusivamente para los fines declarados por la misma y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.

POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO

La revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el siguiente principio: Hacer la información publicada esté disponible gratuitamente al público, apoya a un mayor intercambio del conocimiento global.

PROCESO DE ARBITRAJE (REVISIÓN POR PARES)

El proceso de evaluación que se aplica a los artículos presentados es el siguiente:

Prevía verificación de las pautas metodológicas, se remite el artículo a tres (3) árbitros evaluadores expertos en área temática al que corresponde el trabajo de investigación, a los cuales se les dará un lapso de tres semanas, contados a partir de la fecha de recepción del artículo a los fines que realicen las observaciones cualitativas conforme al formato que la Revista ha diseñado para tales efectos; al cabo de ese tiempo los Árbitros remitirán el artículo al Editor y éste a su vez regresará por vía electrónica, el artículo al autor con las observaciones respectivas para que este modifique o mantenga el contenido del mismo.

Recibida la evaluación del árbitro, el Comité Editorial establecerá la fecha de publicación, siempre y cuando no existan correcciones que realizar, en cuyo caso se notificará al autor para que realice los cambios indicados por los árbitros.

IMPORTANTE: En el proceso de evaluación nunca le es informado al autor el nombre del evaluador, y de la misma manera, el evaluador bajo ninguna circunstancia conoce el nombre del autor del artículo a evaluar. La metodología es a doble ciego.

Los trabajos que se reciban en la revista serán arbitrados por especialistas nacionales y/o internacionales de reconocida trayectoria profesional en sus respectivos campos de investigación. Según las normas de evaluación, los árbitros deberán considerar los siguientes criterios: originalidad, novedad, relevancia, organización interna y de contenido del trabajo, claridad y

coherencia del discurso, competencias gramaticales, fundamentación teórica y metodológica, análisis e interpretación de los resultados, actualidad y relevancia de las fuentes consultadas y aportes al conocimiento.

- Los árbitros, emitirán un veredicto, pudiendo ser una de las siguientes decisiones: a) publicable sin modificaciones; b) Publicable con modificaciones; c) No publicable.
- Si el manuscrito admite correcciones ligeras o sustanciales, las mismas se le harán llegar al autor a su dirección electrónica, para su adecuación definitiva, teniendo para ello un plazo de hasta 30 días. Si en ese lapso el Comité Editorial no ha recibido respuesta, por vía correo electrónico, se entenderá que el autor no tiene interés en publicar en la revista y su manuscrito será descartado definitivamente.
- El Comité Editorial se reserva el derecho de constatar el cumplimiento de las normas editoriales antes de iniciar el proceso de arbitraje

COPYRIGHT: Los derechos de autor en todas las colaboraciones que sean aceptadas para su publicación permanece con sus autores y la revista sólo adquiere los derechos de su publicación. Los autores quedan en plena libertad de volver a usar su propio material pero si la totalidad o cualquier parte del material publicado son reproducidos en otro sitio, el autor deberá reconocer a CATHEDRA como el sitio original de la publicación.

Igualmente, la revista no asume responsabilidad alguna por las posibles violaciones a derechos de terceras personas por el material suministrado por los colaboradores.

Los conceptos u opiniones emitidos en los artículos, será exclusiva responsabilidad del autor o autores.

RULES FOR AUTHORS

1. All the works will be consigned through the electronic address of the system of journals of UMECIT in the electronic direction: revistas.umecit.edu.pa, for which the author must register previously in the magazine. When making the delivery it is necessary to fill the check list of shipments, attach it and ensure the following: the article is original; it has not been previously published, nor has it been previously submitted to another journal; the document is in Word format; complies with the bibliographic and style requirements indicated in the journal's standards, which are based on the APA standard, version 2018.

2. The works should be about research, essays or theoretical articles in the area of specialization of the journal: Law and Forensic Sciences.

3. It must contain the name and surname of the author or authors, indicating their institutional affiliation (work center), country of origin and email address (essential information). Additionally, you must attach a passport-size photograph in digital format of the author or authors. Photography must retain an academic style.

4. The works will be presented in Spanish. The abstract must be additionally translated into English (abstract). The extension will range between one hundred (100) and three hundred (300) words; It must also contain between three (3) and five (5) keywords at most and must also be translated into English on the abstract page. The accepted extension will be between 10 and 20 pages, with a Times New Roman typography, size 12 points.

5. In the writing of the contributions, a formal, simple and direct language should be used, avoiding as much as possible the use of unusual, rhetorical or ambiguous expressions, as well as the excess and abuse of textual citations.

6. The document must be written in third person or in infinitive, except the works under the qualitative approach or written production that corresponds to dissemination works or other knowledge, which will allow the total or partial writing in the first person, according to the style of the author.

7. In the main text, the excessive or inadequate use of bold, italic or cursive letters should be avoided, except for the Latin terms and the foreign words that should appear in italic or italics.

8. The first time an abbreviation is used, it must be in parentheses, in the following, only the abbreviation will be used.

9. In case the work has tables, figures or graphs, they should be listed according to the order in which they appear in the text, with Arabic numerals, followed by a brief title. At the end you must indicate the source (mandatory)

10. The textual quotes should appear in the text in the following format, according to the citation form, as established by the APA standard:

Example 1: When talking about the concept of Research and according to Tamayo and Tamayo (2007): "There are many concepts about scientific research ..." (p.37)

Example 2: When referring to the concept of research we find that: "There are many concepts about scientific research ..." (Tamayo and Tamayo, 2007, p.37)

If the quote has more than 40 words, it must be written in a separate paragraph, without quotation marks, aligned to the left and with a margin of 2.54 cm or 5 tab spaces. All appointments must go to double space.

It can only be omitted deliberately the page number is in the paraphrase and this when you are summarizing several ideas expressed throughout a work and not a particular idea easily locatable in the source cited.

They must also appear in the list of bibliographic references at the end of the work. Observe carefully that all references are marked, that the spelling of the names of the authors corresponds and that the dates given in the text are the same as those in the references.

Other cited rules are the following:

- Two authors: Machado and Rodríguez (2015) affirms ... or (Machado and Rodríguez, 2015, p.20)
- Three to five authors: when they are cited for the first time all the surnames are named, then only the first one and et al is added. Machado, Rodríguez, Alvarez and Martinez (2015) claim that ... / In other experiments the authors found that ... (Machado et al., 2015)
- Six or more authors: from the first mention, only the surname of the first is followed by et al.
- Corporate or institutional author with acronyms or abbreviations: the first citation is placed the full name of the organization and then the abbreviation can be used. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC, 2016) and then OPEC (2016); World Health Organization (WHO, 2014) and then WHO (2014).
- Corporate or institutional author without acronyms or abbreviations: Cultural Institute (2012), (Cultural Institute, 2012).

- Two authors: Machado and Rodríguez (2015) affirms ... or (Machado and Rodríguez, 2015, p.20)
- Three to five authors: when they are cited for the first time all the surnames are named, then only the first one and et al is added. Machado, Rodríguez, Alvarez and Martinez (2015) claim that ... / In other experiments the authors found that ... (Machado et al., 2015)
- Six or more authors: from the first mention, only the surname of the first is followed by et al.
- Corporate or institutional author with acronyms or abbreviations: the first citation is placed the full name of the organization and then the abbreviation can be used. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC, 2016) and then OPEC (2016); World Health Organization (WHO, 2014) and then WHO (2014).
- Corporate or institutional author without acronyms or abbreviations: Cultural Institute (2012), (Cultural Institute, 2012).
- Two or more works in the same parentheses: they are arranged alphabetically following the order of the list of references: Many studies confirm the results (Ceballos, 2012, Paz, 2014, Rodríguez, 2014 and Zamora, 2015).
- Secondary sources or appointment within an appointment: Carlos Portillo (cited in Rodríguez, 2015)
- Old works: ancient and highly recognized religious texts. (Quran 4: 1-3), Luke 3: 2 (New Testament). They are not included in the list of references.
- Personal communications: personal letters, memorandums, electronic messages, etc. Manuela Alvarez (personal communication, June 4, 2010). They are not included in the list of references.
- Source without date: it is placed in parentheses s.f. Alvarado (s.f), Bustamante (s.f).
- Anonymous source: the first words of the title of the cited work are written (Management Report, 2013), Lazarrillo de Tormes (2000).
- Appointments by the same author with the same publication date: in these cases, the year of publication is suffixed to mark the difference (Rodríguez, 2015a), (Rodríguez, 2015b). They are sorted by title alphabetically, in the list of references.

11. This set of rules may vary over time according to what is established by the American Psychological Association (APA), therefore, the changes made in it will be published on the date agreed to its implementation.

12. The list of bibliographical references must be written in alphabetical order and in French indentation, following this style:

- Book: Surname, A. A. (Year). Title. City, Country: Editorial
- Book with editor: Surname, A. A. (Ed.). (Year). Title. City, Country: Editorial.
- Electronic book: Surname, A. A. (Year). Title. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Electronic book with DOI: Surname, A. A. (Year). Title. Doi: xx
- Book chapter: only in cases of compilatory books and anthologies where each chapter has a different author and a compiler or editor: Surname, A. A., and Surname, B. B. (Year). Title of the chapter or the entry. In A. A. Surname. (Ed.), Title of the book (pp. Xx-xx). City, Country: Editorial.
- Periodicals printed format: Surname, A. A., Surname, B. B. and Surname, C. C. (Date). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp.
- Periodical publications with DOI: Surname, A. A., Surname, B. B. and Surname, C. C. (Date). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp. doi: xx
- Periodicals online: Surname, A. A. (Year). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Printed newspaper article: Surname A. A. (Date). Article title. Name of the newspaper, pp-pp. Or the version without author: Title of the article. (Date). Name of the newspaper, pp-pp.
- Online newspaper article: Surname, A. A. (Date). Article title. Name of the newspaper. Retrieved from [http: // www...](http://www...) or Degree Thesis: Author, A. (Year). Title of the thesis (Undergraduate, master's or doctoral thesis). Name of the institution, Place.
- Online degree thesis: Author, A. and Author, A. (Year). Title of the thesis (Undergraduate, master's or doctoral thesis). Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Reference to web pages: Surname, A. A. (Date). Page title. Place of publication: Publishing house. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Sources on CDs: Surname, A. (Year of publication). Title of the work (edition) [CD-ROM]. Place of publication: Publishing house.
- Movies: Surname of the producer, A. (producer) and Surname of the director, A. (director). (Year). Name of the film [cinematographic film]. Country: producer.
- Television series: Surname of the producer, A. (producer). (Year). Name of the series [television series]. Place: Producer.
- Video: Surname of the producer, A. (Producer). (Year). Name of the series [Source]. Place.
- Podcast: Surname, A. (Producer). (Date). Podcast title [Audio podcast]. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Forums on the internet, list of e-mail addresses and other online communities: Author, (Day, Month, Year) Title of the message [Description of the form] Retrieved from [http: // www...](http://www...)

OTHER CONDITIONS OF PUBLICATION:

- Only original and updated works that represent significant theoretical contributions will be received.
- The works that are selected for publication, will not receive economic or any kind of compensation. Only a proof of publication signed by the publisher will be delivered, if requested.
- To reproduce the material published by the journal, the author requires express authorization from the Editorial Committee of the publication.

TYPES OF SCIENTIFIC PRODUCTION IN CATHEDRA

1. Articles: they are the productions with primary category like: reports of empirical investigations in which, they are made known the advances or results, general or partial, of an original investigation, in some area of the law and the forensic sciences that do not have been published previously.

The structure of refereed articles must meet the following standards:

- Introduction, presenting the problem or object of study and objectives of the investigation.
- The theories on which the investigative work is based.
- Method / Methodology used in the investigation.
- Partial or total results obtained in the investigation.
- Discussion, interpretation and argumentation of the results.

2. Essays: It is a literary genre in which the writer expresses his beliefs or personal positions, combining imbricated scientific knowledge and artistic creativity.

It is based on the investigative and academic exercises that are presented in written form briefly exposing the thoughts and analysis of the writer regarding a specific area of knowledge.

This type of publication shares with science, one of its essential purposes, which is to explore reality in more depth in order to approach the truth which alludes, either to a person, object, event or particular phenomenon or social circumstance standing out, for a simple speech but with a high linguistic level according to the type of reader to which it is addressed.

It includes the work of meta-analysis and critical evaluation of previous research, literature on any area of study of any science.

This type of work should, preferably, offer the state of knowledge of said object of study; or, allow the identification of relationships, contradictions or inconsistencies and propose solutions for further studies.

With respect to the structure of the Essays: they do not have a pre-established scheme because it depends on the rationality of the author, however, the text must be characterized by coherence and cohesion, based on a reflective-investigative discourse considering the bibliographic background of the topic. To say consists in investigating the knowledge generated by other researchers.

3. Theoretical articles: they are works in which literary themes or theories about the topics of the journal are analyzed, contribute to the advancement of knowledge and / or practice in some area of this field. In this type of work, the author follows up the development of the theory to expand or refine theoretical constructs or practical proposals.

Commonly, in this type of articles, the author presents a new theory, but can also analyze the consistencies or inconsistencies of existing theories.

Structure of the theoretical Articles: It is similar to that used in the tests.

WORK DELIVERY GUIDELINES

As part of the submission process, authors are required to indicate if their article complies with

The following items: (If not, the item will be returned)

1. The work to send is original.
2. The article to be sent has not been previously published, nor has it been previously submitted to another magazine.
3. The document is in Word format.
4. The text is 1.5 cm spaced, the font type is Times New Roman and the size is 12 points and all the illustrations, figures and tables are within the text in the corresponding place, duly identified.
5. The text complies with the bibliographic and style requirements indicated in the author's rules.
6. All work must be consigned to the journal through the electronic address of the UMECIT journal system at the e-mail address: revistas.umecit.edu.pa, for which the author must register in advance in the journal.
7. Once the works have been received, acknowledgment of the manuscript is sent via email to the author.

8. Attached photo of the authors in digital format, size card.

9. Next, the Editorial Committee makes a preliminary evaluation of the manuscript to determine if it complies with the editorial standards of the CATHEDRA Magazine.

10. Considered the pertinence and verified the compliance of the norms, the Editorial Committee submits the articles to arbitration, through the double blind modality, which will assure the confidentiality of the process, by keeping in reserve the identity of the author or authors and of the arbitrators. Otherwise, if the work does not comply with the rules of publication of the journal, the Editorial Committee will propose that it is not sent to the arbitration process, and the author will be notified about this decision, email way.

11. The not foreseen in these rules will be resolved by the Editorial Committee, attending to the interests of Cathedra Magazine.

PRIVACY STATEMENT

The names and email addresses entered in the magazine will be used exclusively for the purposes declared by the magazine and will not be available for any other purpose or another person.

OPEN ACCESS POLICY

The journal provides immediate free access to its content under the following principle: Make published information freely available to the public, support a greater exchange of global knowledge.

ARBITRATION PROCESS (REVIEW BY COUPLES)

The evaluation process that applies to the articles presented is as follows:

After verification of the methodological guidelines, the article is sent to three (3) expert evaluating arbitrators in thematic area corresponding to the research work, which will be given a period of three weeks, counted from the date of receipt of the article for the purposes that make the qualitative observations according to the format that the Journal has designed for such purposes; At the end of that time the Referees will send the article to the Editor and the latter in turn will return electronically, the article to the author with the respective observations so that it modifies or maintains the content of the same.

Once the referee's evaluation has been received, the Editorial Committee will establish the date of publication, as long as there are no corrections to be made, in which case the author will be notified to make the changes indicated by the arbitrators.

IMPORTANT: In the evaluation process the author is never informed of the name of the evaluator, and in the same way, the evaluator under no circumstances knows the name of the author of the article to be evaluated. The methodology is double blind.

The works received in the journal will be arbitrated by national and / or international specialists of recognized professional experience in their respective fields of research. According to the norms of evaluation, the referees should consider the following criteria: originality, novelty, relevance, internal organization and content of the work, clarity and coherence of the discourse, grammatical competences, theoretical and methodological foundation, analysis and interpretation of the results, actuality and relevance of the sources consulted and contributions to knowledge.

- The arbitrators will issue a verdict, which may be one of the following decisions: a) publishable without modifications; b) Publishable with modifications; c) Not publishable.

- If the manuscript admits slight or substantial corrections, they will be sent to the author to his electronic address, for its final adaptation, having for this a period of up to 30 days. If during this period the Editorial Committee has not received an answer, by email, it will be understood that the author has no interest in publishing in the journal and his manuscript will be definitively discarded.

-The Editorial Committee reserves the right to verify compliance with the editorial rules before initiating the arbitration process

COPYRIGHT: Copyrights in all the collaborations that are accepted for publication remain with their authors and the magazine only acquires the rights of its publication. The authors are free to reuse their own material but if all or any part of the published material is reproduced in another site, the author must recognize CATHEDRA as the original site of the publication.

Likewise, the magazine does not assume any responsibility for possible violations of the rights of third parties for the material provided by the collaborators.

The concepts or opinions issued in the articles will be the sole responsibility of the author or authors.



**SEDE PRINCIPAL: EDIFICIO FUNDADORES, VÍA SIMÓN BOLÍVAR, A UN COSTADO DEL PUENTE ELEVADO, A LADO DE CAFÉ DURÁN.
TEL. 264-9908 / 263-6356**

**SEDE A VÍA VENETTO
395-7383**

**SEDE B POSTGRADOS Y MAESTRÍAS
253-2519**

**SEDE LA CHORRERA
254-1141**

**SEDE CHITRÉ
996-4260**

**SEDE SANTIAGO
998-0363**



www.umecit.edu.pa

revistas.umecit.edu.pa

[correo: cathedra@umecit.edu.pa](mailto:cathedra@umecit.edu.pa)